

# Urbanización, mercados de trabajo y escenarios sociales en el México finisecular

Marina Ariza\*

Juan Manuel Ramírez\*\*

## Introducción<sup>1</sup>

LOS ASPECTOS QUE engloban la singularidad de México en el contexto de los países analizados en este libro quizá sean su nivel de urbanización medio-alto, la continua pervivencia de una elevada heterogeneidad estructural en sus mercados laborales y su especial ubicación geopolítica de cara a la división internacional del trabajo. A diferencia de las naciones del Cono Sur, de urbanización avanzada y mercados de trabajo más formalizados –no obstante los embates económicos recientes–, es apenas en la década de 1980 cuando más de la mitad de la población mexicana pasa a residir en una localidad urbana.<sup>2</sup> El patrón de urbanización predominante durante buena parte del siglo xx estuvo caracterizado por la hegemonía de las fuerzas concentradoras que convirtieron a la ciudad de México en la vívida imagen de la tan connotada macrocefalia urbana latinoamericana.

Las últimas décadas del siglo xx trajeron consigo no sólo la consolidación de tendencias previas sino la irrupción de escenarios económicos y sociales has-

\*Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México.

\*\*Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Guadalajara, México.

<sup>1</sup> Queremos agradecer el apoyo brindado por diferentes personas e instituciones en la elaboración de este trabajo. Renato Santos Coy fungió como asistente de investigación en la búsqueda de información bibliográfica y cuantitativa. Miguel Ramírez Braulio fue el supervisor de las tareas de campo que sirvieron de base para el análisis cualitativo que se implementa en la última parte de este capítulo. Juan Trejo, del Departamento de Estudios Sociodemográficos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), amablemente atendió todas nuestras solicitudes de información, en particular en lo que atañe a la metodología para la contabilización del sector informal. Por último, Patricio Solís, colega y amigo, nos brindó generosamente su apoyo en algunos aspectos técnicos de la información.

<sup>2</sup> Se consideran como localidades urbanas a las de 15,000 habitantes y más.

ta hace poco impensables. Por un lado, el mapa urbano nacional evolucionó hacia una estructura más equilibrada comenzando a admitir la presencia de otras constelaciones metropolitanas rivales en desmedro del fuerte peso gravitacional de la ciudad principal; por otro, los mercados de trabajo sufrieron transformaciones decisivas, con seguridad más traumáticas, expresadas en: reiteradas crisis económicas, fuertes devaluaciones monetarias, deterioro del salario real, de la calidad del trabajo, y crecimiento del autoempleo, entre otros aspectos, que no son más que epifenómenos de un proceso más general sintetizado en un cambio de modelo económico.

Una nota poco esperanzadora de la cotidianidad urbana nacional ha terminado por escribirse en los últimos años de la década de 1990 con el crecimiento exponencial de la violencia criminal en un conjunto seleccionado de ciudades mexicanas. Este aspecto, un rasgo emergente y generalizado de las sociedades de América Latina, habla de las cortapisas del modelo económico en curso y tiene entre sus muchas consecuencias la alteración de las pautas de la sociabilidad urbana.

Por último, los actores políticos naturales del proceso de urbanización latinoamericano: los pobladores que demandan un espacio (una pertenencia) en la ciudad, un techo y una infraestructura de servicios que les asegure una vida digna, protagonizaron durante estos años tanto los momentos más álgidos y combativos de esa lucha, como los de su declive y desactivación.

En las páginas que siguen exponemos las transformaciones principales ocurridas en el país en cada uno de los ámbitos señalados: urbanización, mercados de trabajo, violencia social y movilización popular por la vivienda, destacando los aspectos de continuidad y cambio, y los procesos con los que se asocian. Los dos primeros engloban los factores estructurales detrás del proceso de conformación de las ciudades como tales y en tanto ámbitos laborales, e integran un gran bloque temático; los dos últimos recogen facetas complementarias de la vida urbana de nuestros días: la creciente violencia social y la cronología de la movilización popular por la vivienda, escenarios sociales contrastantes del México finisecular.

## **Tendencias estructurales en la conformación de las ciudades y los mercados de trabajo urbanos**

### *Aspectos generales del crecimiento urbano, 1970-2000*

Es recién en el último cuarto del siglo xx cuando México puede considerarse una sociedad urbana. En efecto, no es sino hasta la década de 1980 cuando más de la mitad de su población pasa a residir en localidades de 15,000 habitantes

y más (véase cuadro 1), porcentaje que en el año 2000 llegó al 67.3 por ciento de la población. Entre el principio y el fin del periodo de estudio (1970-2000), el número de ciudades se duplicó (de 174 a 350), mientras el volumen de habitantes urbanos creció aproximadamente un 188 por ciento (22,730 millones a 65,653).<sup>3</sup>

En sentido general, los años de 1970 a 2000 representan tanto momentos de cambio como de continuidad con las tendencias precedentes del desarrollo urbano. En al menos dos aspectos clave es fácil reconocer un quiebre en las pautas previas: el ritmo de crecimiento de la población urbana y la tendencia a la superconcentración en la ciudad principal (primacía). Indudablemente, desde cualquier parámetro que se evalúe, los años de 1950 a 1970 fueron los de mayor impulso urbanizador. En ellos la población urbana creció a un ritmo anual de aproximadamente el 3.2 por ciento y el tamaño de la ciudad principal fue –al menos en 1950– siete veces mayor que el de la siguiente ciudad (Guadalajara) (Garza, 2003). En esos años la ciudad de México concentraba poco menos del 40 por ciento de toda la población urbana. Pero en las tres últimas décadas del siglo xx, el ritmo de la urbanización se desaceleró notablemente al pasar de una tasa de crecimiento medio anual del 2 por ciento en 1970, al 0.6 por ciento en el año 2000. En ese mismo lapso la ciudad principal redujo de manera significativa su participación en el conjunto de la población urbana a poco más del 27 por ciento del total. En consonancia con estos cambios, el índice de primacía de la ciudad de México respecto de Guadalajara experimentó un descenso no despreciable (del 5.83 al 4.89 por ciento).

En contraste, la pauta de crecimiento por tamaño de las ciudades guarda más similitudes que diferencias con las tendencias del periodo anterior (1950-1970), pues en lo esencial la estructura urbana –vista a través de la jerarquía– da cuenta de una considerable estabilidad al mantenerse, y aun consolidarse, la tendencia a la mayor concentración de población en las localidades grandes en detrimento de las pequeñas y medianas por el movimiento todavía ascendente en la jerarquía urbana.

Las llamadas metrópolis (de más de 1 millón de habitantes), por el contrario, no muestran una tendencia tan unidireccional. Entre 1970 y 1990 se observa una inflexión de su posición relativa (del 50 al 43.6 por ciento), que es recuperada de nuevo en el año 2000. Así, aun cuando ocurrieron variaciones importantes en el interregno, tanto al principio como al fin del periodo, las metrópolis de más de un millón de habitantes concentran el mismo porcentaje de población urbana: la mitad (50 por ciento), sólo que ahora, recién entrado el

<sup>3</sup>En este importante incremento incide naturalmente el efecto acumulado de las altas tasas de crecimiento poblacional.

CUADRO 1  
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CIUDADES. INDICADORES SELECCIONADOS, MÉXICO, 1970-2000

	1970		1980		1990		2000	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Pob. urbana (miles)	22,730		36,739		51,491		65,653	
Grado de urbanización	47.1		55.0		63.4		67.3	
Tasa de urbanización	2.0		1.5		0.8		0.6	
Ciudades pequeñas								
15,000-19,000	43	3.3	55	2.5	80	2.7	70	1.8
20,000-49,000	72	9.3	96	7.8	124	7.3	164	7.3
Subtotal	115	12.6	151	10.3	204	10.0	234	91.0
Ciudades medias								
50,000-100,000	25	7.7	24	4.3	39	5.4	46	5.0
100,000-499,000	30	27.0	44	27.3	42	21.3	42	16.5
Subtotal	55	34.7	68	31.6	81	26.7	88	21.5

	1970	1980	1990	2000				
Ciudades grandes								
500,000-999,000	1	2.8	4	6.8	15	19.6	19	19.2
1'000,000 y más	3	50.0	4	51.3	4	43.6	9	50.2
Subtotal	4	52.8	8	58.1	19	63.2	28	69.4
Gran total	174	100.1	227	100.0	304	99.9	350	100.0
Índice de primacía								
Dos ciudades <sup>a</sup>	5.83			6.11				5.10
Cuatro ciudades <sup>b</sup>	2.57			2.57				2.10
Porcentaje de la población urbana	37.94			36.83				29.57
Porcentaje de la población total	17.88			20.71				18.74

<sup>a</sup> Ciudad de México con relación a Guadalajara.

<sup>b</sup> Ciudad de México con relación a Guadalajara, Monterrey y Puebla.

Fuente: Elaborado con base en Garza (2000a y 2003).

siglo XXI, éste se distribuye entre un número mayor de localidades de ese rango, nueve en vez de las tres que existían en 1970, lo que quiere decir que ocurrió una redistribución de la población hacia otras metrópolis de la República. Otros aspectos como la evolución de las tendencias migratorias internas confirman también la pérdida de importancia de la ciudad de México, y en particular del Distrito Federal, el que desde hace ya bastante tiempo expulsa más población de la que atrae.

No obstante, la menor capacidad de concentración y atracción poblacional de los principales centros urbanos no es un fenómeno privativo de la ciudad de México, sino que empieza a manifestarse de manera incipiente en otros puntos metropolitanos del país. Se ha constatado así un balance migratorio desfavorable de las ciudades de Guadalajara, Puebla y Torreón en el quinquenio 1992-1997, en equilibrio para la ciudad de Toluca, adyacente a la ciudad de México, y positivo únicamente para Monterrey<sup>4</sup> (Tuirán, 2000). En cada caso, estos saldos migratorios negativos representaron una reversión del comportamiento observado en el quinquenio 1987-1992, de atracción neta, con excepción de la ciudad de México.

#### Evolución por tamaño de localidad

El dinamismo diferencial mostrado por las ciudades que integran la jerarquía urbana nacional (pequeñas, medias, grandes, metrópolis), se recoge nítidamente en la evolución observada por las tasas de crecimiento intercensales en el periodo de estudio<sup>5</sup> (véase cuadro 2).

En la primera de estas décadas (1960-1970), y como expresión del contexto demográfico de alto crecimiento poblacional que la enmarca, la mayoría de las ciudades registra tasas de crecimiento realmente elevadas, del orden del 4 y sobre el 5 por ciento anual. Sin embargo, son las ciudades

<sup>4</sup>En este caso el saldo migratorio es una medida de los intercambios de población que ocurren en varias direcciones del espacio metropolitano: de su centro o periferia al resto del país, y de esta última a los contornos metropolitanos, periférico o central (Tuirán, 2000).

<sup>5</sup>Para evitar el efecto del llamado "sesgo de filtración jerárquica" —el que ocurre cuando por no controlar el tamaño de localidad al inicio del periodo se incurre en la falsa imputación de atribuir a la ciudad siguiente una expansión que es parcialmente producida por el efecto de crecimiento de la ciudad inmediatamente anterior en tamaño (véanse Solís, 1997 y Tuirán, 2000)— se tomaron las siguientes precauciones metodológicas: 1. se seleccionó como base para la contabilidad a la localidad, y no al municipio (el que se basa en una definición administrativa y puede contener por tanto, lejos de la cabecera municipal, zonas rurales); 2. se identificó cada localidad al inicio del periodo de estudio, y se hizo un seguimiento puntual a lo largo de cada momento censal; 3. en el caso de las áreas metropolitanas, se tomó la composición de éstas al final del periodo y se evaluaron entonces, hacia atrás, los cambios ocurridos en su delimitación para ver cuáles localidades fueron absorbiendo. El cálculo de estos datos implica un laborioso proceso de trabajo de las fuentes censales en cada año. Patricio Solís (1997) lo hizo para el periodo 1960-1995; muy gentilmente accedió a completar la información para el año 2000 y a permitir su publicación en este texto.

CUADRO 2  
TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LAS CIUDADES  
SEGÚN TAMAÑO, MÉXICO, 1960-2000

<i>Tamaño de ciudad</i>		1960-1970	1970-1990	1990-1995	1995-2000
Ciudad pequeña	10,000-14,000	2.81	2.65	1.95	1.18
	15,000-19,000	4.40	3.18	2.30	1.93
	20,000-49,000	5.01	3.37	1.94	1.37
Ciudad media	50,000-99,000	4.97	4.02	2.84	1.62
	100,000-499,000	4.11	3.59	3.04	1.99
Gran ciudad	500,000-999,999	5.62	3.28	3.08	1.96
Metrópolis	1'000,000 y más	5.18	2.77	2.10	1.83

Fuente: Solís (1997 y 2003).

grandes (500,000-999,999) y las metrópolis las que se expanden a un mayor ritmo relativo. En los dos decenios siguientes (1970-1990), las metrópolis y ciudades grandes ceden su lugar a las ciudades medias, las que indiscutiblemente comandan el proceso en un contexto de todavía elevado dinamismo poblacional.<sup>6</sup> Al llegar al primer lustro de la década de 1990 son las ciudades grandes de nuevo, y las medias, en especial las más pobladas (100,000 a 499,000), las que mayores ritmos de crecimiento muestran, bastante lejanos de los valores exhibidos por las metrópolis. En el último quinquenio de la década de 1990, y en oposición a lo que ocurría al principio del periodo de observación, las tasas de crecimiento denotan la desaceleración de la dinámica demográfica global: todos los valores se encuentran por debajo del 2 por ciento. Sin embargo, continúan siendo las ciudades grandes (500,000-999,000) y las medias de mayor tamaño las que más rápidamente se expanden, seguidas ahora muy de cerca tanto por las ciudades pequeñas de menos de 20,000 habitantes, como por las metrópolis. Es de destacar que en este escenario de desaceleración del crecimiento poblacional nacional ha ocurrido una suerte de convergencia en los ritmos de expansión que exhiben las ciudades que se mostraron más dinámicas a lo largo de los últimos 40 años (metrópolis, medianas, grandes, y algunas de las pequeñas). Mientras las metrópolis tuvieron su mayor ritmo de crecimiento relativo en la década de 1960, hecho que coincidió con las tasas más altas de urbanización registradas por México durante el siglo pasado (Garza, 2003), las ciudades medias y pe-

<sup>6</sup>La evaluación de los periodos 1990-1995 y 1995-2000 se hizo con base en los censos y el Censo Nacional de Población y Vivienda 1995, de perfecta comparabilidad.

queñas continuaron expandiéndose en las décadas de 1970 y 1980, e incluso en algunos casos hasta principios de la de 1990, con ritmos de crecimiento por encima de las urbes situadas en la cúspide de la jerarquía urbana. La distancia en el crecimiento entre todos los tamaños de ciudad se aminora a finales de la década de 1990, producto de los cambios dictados por el curso de la transición demográfica, con una tendencia a la convergencia en la velocidad de expansión anual de todos los tamaños de ciudad, que no logra anular, sin embargo, las diferencias preexistentes.

#### Dinamismo urbano regional y crecimiento metropolitano

De las tendencias antes descriptas sobresale el carácter crecientemente metropolitano del mapa urbano nacional, cada vez más conformado por una serie de constelaciones metropolitanas con sus respectivos centros y ciudades satélites y por un vasto número de ciudades grandes (de 500,000 a 999,000). Del universo casi unipolar de las décadas de 1960 y 1970, hemos transitado hacia una pluralidad de ejes metropolitanos que se disputan entre sí ámbitos de ascendencia en el espacio urbano nacional acompañados de la pujante expansión de las ciudades grandes.

Cada uno de estos centros metropolitanos ejerce una distinta ascendencia regional. En sentido general, el proceso de urbanización ha tenido su mayor dinamismo en las regiones Centro, Centro-Norte y Centro-Occidente, por un lado; y Norte y Fronteriza, por el otro. Por razones complejas que atañen a la evolución socioespacial del país, las regiones sur y sureste han quedado relegadas como actores principales de la fuerte expansión urbana ocurrida en el país durante la segunda mitad del siglo xx. Cinco son las metrópolis que impulsan el crecimiento en las áreas regionales recién mencionadas (véase diagrama 1 del anexo): la ciudad de México en la región Centro; Guadalajara en la Centro-Occidente; Monterrey en la noreste; Ciudad Juárez en la Centro-Norte y Tijuana en la llamada Mar de Cortés. Alrededor de estas cinco metrópolis gira una constelación de ciudades que no ha dejado de presentar algunas variaciones entre 1970 y 2000. El diagrama 2 y el cuadro A del anexo, ambos en el anexo, resaltan algunos de los cambios ocurridos en este conjunto metropolitano, observados a través del seguimiento puntual de las 25 primeras ciudades del país en dos momentos censales (1970 y 2000), y de las regiones a las que pertenecen. Tres aspectos llaman la atención: 1. el fortalecimiento extraordinario del conjunto formado por la metrópoli de la ciudad principal y los núcleos urbanos que la rodean; 2. el mantenimiento del conglomerado conformado por la ciudad de Guadalajara y sus satélites; 3. la delineación de un sexto centro metropolitano en la región Golfo ajeno al

enorme poder gravitacional del centro y norte del país: la ciudad de Veracruz y sus adláteres Villahermosa y Orizaba.<sup>7</sup>

En efecto, el conjunto metropolitano formado por la ciudad de México y las urbes circunvecinas pasó de contener tres a siete de las 25 primeras ciudades del país. A Puebla y Acapulco se sumaron en el año 2000 Querétaro, Toluca, Cuernavaca y Tlaxcala, como centros urbanos que responden al enorme poder de atracción de esta macrociudad latinoamericana. Dicha reagrupación se hizo a expensas de los demás centros regionales destacados, con excepción del conformado por Guadalajara en la región Centro Norte y Occidente, y del que emerge en la región Golfo, liderado por Veracruz. Así, Cajeme, Saltillo, Durango, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, cedieron sus lugares a Toluca, Cuernavaca, Querétaro, Tlaxcala, Orizaba y Villahermosa en el universo de las 25 primeras ciudades que este conjunto de centros metropolitanos engloba (véase diagrama 1 del anexo). En este proceso, la región III (Noreste, donde se ubica la ciudad de Monterrey) perdió cuatro de las primeras 25 ciudades que tenía en 1970; las regiones I (Mar de Cortés) y II (Norte Centro y asiento de Ciudad Juárez), perdieron una cada una; y las regiones V (Centro) y VI, (Golfo) ganaron seis, cuatro y dos respectivamente.

Estas diferencias, que además se manifiestan en las tasas de crecimiento medio anual de las regiones consideradas (datos no presentados en los cuadros), son la expresión de diversos procesos, entre ellos las discrepancias regionales en el descenso de la fecundidad todavía prevalecientes en el país, el grado de urbanización diferencial entre ellas, y el cambio en la relocalización de las actividades productivas hacia una mayor diversificación espacial, lo que ha modificado el papel económico de algunas ciudades (Olivera Lozano, 1997; Bendesky, 2003).

Así, en el lapso 1980-1988 fueron las urbes y regiones más vinculadas a la inversión externa y a los servicios de exportación (Norte y, en menor medida, Centro Norte) las que se vieron favorecidas por el nuevo impulso industrializador vinculado al mercado externo. En cambio, las grandes metrópolis del Noroeste (Monterrey) y Centro (ciudad de México), resultaron perdedoras netas (Olivera Lozano, 1997). Baste como ejemplo el efecto diferencial de la crisis de 1994 sobre el espacio urbano regional: mientras en la industria maquiladora su impacto fue nulo, las ciudades de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Puebla exhibieron los mayores volúmenes absolutos de despido de personal (Alba, 1998; Zenteno, 2002). Producto de los cambios destacados, los seis estados fronterizos, en contraposición con los del sureste, mostraron tasas de creci-

<sup>7</sup>En estricto sentido, el fenómeno de metropolización tiene lugar, no sólo cuando una ciudad rebasa el umbral del millón de habitantes, sino cuando su expansión rebasa el límite político-administrativo que la conforma y abarca, en tanto área, dos o más municipios que no le pertenecen (Sobrinó, 2003).

miento promedio del PIB superiores a la media nacional, de alrededor del 3.6 por ciento entre 1995 y 2000 (Bendesky, 2003).

Estos aspectos realzan la función económica que tales centros urbanos juegan en el nuevo escenario económico global. Tijuana y Juárez son esencialmente ciudades maquiladoras, rasgo que define la especialización económica del sistema urbano-fronterizo al que pertenecen, el que no fortuitamente ha tenido el mejor desempeño en el contexto nacional en la última década (Zenteno, 2002). Es importante acotar que en los últimos años ha tenido lugar un importante proceso de expansión territorial de la industria maquiladora por el cual las menos competitivas se han desplazado hacia el centro del país en procura de salarios más bajos y condiciones más atractivas<sup>8</sup> (Fleck, 2001). Es característico de este llamado *patrón emergente* de distribución territorial de la maquila la ubicación preferencial en las ciudades medias, e incluso, en algunas localidades rurales (Carrillo y De la O, 2003).<sup>9</sup>

En el mismo tenor, la ciudad de Guadalajara, epicentro de la región Centro Norte y Occidente y asiento tradicional de la pequeña producción artesanal, ha emprendido un proceso de diversificación de su planta industrial desde la pequeña industria artesanal a empresas de mayor tamaño y a la producción de bienes de capital e intermedios. En los últimos años ha sido también receptáculo de la inversión extranjera vía la industria maquiladora de exportación (García y Oliveira, 2001; Zenteno, 2002). Monterrey, tradicionalmente un vértice importante de la industrialización mexicana, eje de la industria pesada y de bienes de capital, ha sufrido un proceso importante de reestructuración económica que le ha permitido reposicionarse competitivamente en la arena internacional, no sin antes sufrir los embates del quiebre económico de mediados de la década de 1990 (Alba, 1998). Mérida, a mayor distancia del centro, ha recibido en los últimos años un vigoroso impulso económico con el aumento del empleo maquilador (Zenteno, 2002). A su vez, Veracruz, perteneciente al grupo de ciudades portuarias, ha tendido a fortalecer las actividades económicas vinculadas a los servicios y al turismo (Zenteno, 2000). Resta la ciudad de México, centro gravitacional del sistema urbano nacional, que en el contexto de la nueva geografía espacial ha disminuido su peso industrial acentuando su vocación terciaria y de intermediación comercial en el entorno globalizador (Parnreiter, 2002).

Los datos aquí presentados no dejan dudas acerca de que en las décadas que condujeron al final del siglo XX se produjo una reversión de la tendencia a la polarización espacial observada durante las de 1950 y 1960, y por tanto, una

<sup>8</sup>Entre 1979 y 1998 el porcentaje de industrias maquiladoras en la frontera descendió del 88 al 62 por ciento (INEGI, 1991 y 1998).

<sup>9</sup>Así, por ejemplo, la industria textil maquiladora ubicada en municipios no fronterizos pasó de 27 establecimientos en 1985 a 783 en el año 2000 (Carrillo y De la O, 2003).

disminución de la concentración urbana, coherente por lo demás con las pausas marcadas por el llamado ciclo de desarrollo urbano, tal y como se conoce en la bibliografía especializada (Berry, 1980; Geyer y Kontuly, 1993; Graizbord, 1984, 1992; Sobrino, 1996 y 2003). Este proceso de desconcentración urbana es en sí mismo una expresión del carácter eminentemente diferencial de la urbanización.<sup>10</sup>

Así, mientras el descenso de la primacía urbana, la redistribución hacia otras ciudades y centros metropolitanos del peso poblacional de la ciudad principal, el mayor crecimiento relativo de polos regionales ajenos al poder gravitacional del eje central, y la desaceleración del ritmo de urbanización producto del curso de la transición urbana, hablan a favor de un patrón relativamente desconcentrado del escenario urbano mexicano en el último cuarto del siglo xx; el fortalecimiento extraordinario de la constelación de ciudades que rodea a la metrópoli principal, y el movimiento todavía ascendente en el proceso de filtración jerárquica de la pirámide urbana, denotan, por el contrario, la prevalencia de tendencias concentradoras (Garza, 1999, 2000a, 2000b, y 2003).<sup>11</sup> En estas tendencias contrapuestas y coexistentes inciden una variedad de factores, entre los que a continuación resaltamos los de naturaleza demográfica y socioeconómica.

Como ha quedado en evidencia, el proceso de urbanización está centralmente condicionado por la dinámica demográfica en más de un sentido. El descenso en el porcentaje de población que absorbe la ciudad principal en las décadas de 1980 y 1990 con respecto a la de 1970 (ocurrido en México y en América Latina), una medida de desconcentración relativa, es en parte una expresión de la desaceleración del crecimiento demográfico (diferencial a lo largo del territorio) y de la menor intensidad de los desplazamientos internos. Característicamente, cuando la distribución espacial con alta primacía urbana se conformó entre las décadas de 1940 y 1960, las ciudades principales de América Latina crecían con ritmos superiores al resto de los países y de la población urbana total.<sup>12</sup> En el escenario opuesto que brindan los años postreros del siglo xx, el descenso en la fecundidad

<sup>10</sup> Es el concepto de ciclo de desarrollo urbano el que condensa la idea de urbanización diferencial. Tal y como lo reseña Sobrino (2003: 101), son cuatro los elementos principales que darían cuenta de la asincronía en el crecimiento de cada tamaño de ciudad: 1. las fuerzas del mercado; 2. los atributos locacionales; 3. la difusión de las innovaciones; y 4. las economías de aglomeración. A ellos habría que agregar los de carácter demográfico.

<sup>11</sup> Existe en México una suerte de polarización del debate acerca de la naturaleza del proceso de urbanización ocurrido en el país en los últimos años. Las posiciones fluctúan entre quienes afirman que a partir de 1970, *grosso modo*, tiene lugar una inversión de la pauta concentradora (Ruiz, 1986; Corona y Tuirán, 1994; Graizbord, 1984, 1992; Sobrino, 1996 y 2003; Aguilar, Graizbord y Sánchez, 1996; Negrete, 1999); y quienes, teniendo como vocero principal a Garza (1999, 2000a, 2000b, y 2003), entienden que las tendencias observadas, lejos de obedecer a una suerte de desconcentración “espontánea”, responden a una acentuación de la tendencia concentradora y a un cambio en el nivel de la concentración, de la metrópolis a la megalópolis (solapamiento de al menos dos metrópolis).

<sup>12</sup> En ese contexto, las migraciones campo-ciudad contribuían en el conjunto de América Latina con alrededor del 40 por ciento del crecimiento urbano (Lattes, 1994).

y la pérdida de impulso de las migraciones campo-ciudad restan por sí solos dinamismo al proceso centralizador, determinando un menor crecimiento relativo de los centros principales en relación al resto urbano. Sólo en este sentido podemos decir que las tendencias demográficas actuales promueven *hasta cierto punto* una atenuación de la concentración espacial en los centros de mayor jerarquía.<sup>13</sup>

Pero en la medida en que el sistema urbano es expresión de una “división del trabajo productivo”, de la distinta funcionalidad y/o especialización de las ciudades en un entorno socioeconómico dado, como acabamos de constatar, la distribución espacial expresa la lógica de uso espacial que rige una estrategia de producción dada, la que se esfuerza por aprovechar las ventajas geográficas y/o económicas existentes. Queda claro que aun cuando en el nuevo esquema de crecimiento existen fuerzas que propenden hacia una desconcentración relativa del espacio urbano al determinar la localización espacial de la producción fuera del histórico centro del país, en especial en el eje fronterizo; éstas son contrarrestadas por la arraigada tendencia a aprovechar las economías de escalas preexistentes. Ello explica quizás el fortalecimiento de la constelación metropolitana ubicada en el ámbito de la ciudad principal en los últimos años, no obstante la reorganización espacial de la producción ocurrida en el nuevo escenario económico global.

### *Evolución reciente de los mercados de trabajo en México (1980-2000)*

Es probable que haciendo un ejercicio de comparación histórica, sean pocos los periodos económicos que encierren tantas y tan decisivas transformaciones en los mercados de trabajo en México como los que acotan las décadas de 1980 a 2000. Dos grandes crisis y sendos momentos de tímida recuperación económica, tres devaluaciones monetarias, un profundo cambio en el esquema de crecimiento, una caída prácticamente irrecuperable de los salarios reales acompañada de su dispersión, la proliferación de las actividades no asalariadas, la desprotección laboral, la polarización y el deterioro en la calidad del empleo son, a grandes rasgos, los eventos que enmarcan el periodo. A continuación haremos una breve mención de los más relevantes.

#### Tendencias generales

La década de 1980 comienza, en efecto, con una aguda contracción económica que no fue más que la escenificación tardía en el caso mexicano de un episodio más

<sup>13</sup>De hecho, y de acuerdo con Sobrino (2003: 102), la fase de la polarización regresiva de la urbanización ocurrida en el país se explica principalmente por la desconcentración demográfica antes que económica.

de la llamada crisis de la deuda, la que azotó a la mayoría de los países latinoamericanos desde la década de 1970.<sup>14</sup> Las manifestaciones de esta crisis resultaron ostensibles en la pronunciada caída del producto per cápita y del salario real, en la fuerte devaluación monetaria, y en la no menos importante alza inflacionaria<sup>15</sup> (Tello, 1987; Ros, 1985; Oliveira y García, 1996 y 1998). En el mediano plazo, sin embargo, la crisis no fue más que la antesala de un cambio más radical aún, el que habría de transformar el esquema de crecimiento económico desde un modelo sustentado en la protección del mercado interno y la industrialización por sustitución de importaciones –hegemónico *grosso modo* entre 1940 y 1970– hacia otro cuyos ejes descansan en la comercialización, la reorientación del papel del Estado en la economía, y la apertura y competitividad externas. Sería 1986 el punto de arranque de una serie de medidas decisivas que crearían la plataforma institucional necesaria para el despegue del nuevo modelo económico.

Es quizás el freno en el crecimiento industrial ocurrido en esos años el rostro más evidente de los decisivos cambios estructurales a que hemos hecho mención. El mismo resulta evidente en la pérdida de importancia que entre 1980 y 1986 registró la manufactura como generadora de empleo a nivel nacional<sup>16</sup> (Garza, 1991; Oliveira y García, 1996). Fueron las empresas destinadas a la producción de bienes de capital y de consumo duradero las más severamente afectadas por la crisis, de ahí que las ciudades donde ellas eran importantes (Monterrey, ciudad de México) registraron la mayor contracción relativa del empleo (Olivera Lozano, 1997).<sup>17</sup> Los datos disponibles muestran una reducción del 21.2 al 17 por ciento de la PEA industrial entre 1979 y 1991, que tiende a recuperarse a finales de la década de 1990<sup>18</sup> (Oliveira, Ariza y Eternod, 2001).

El golpe al sector industrial fue contrabalanceado por el auge de las exportaciones manufactureras (maquilas), puntal decisivo del nuevo esquema de crecimiento. Éstas experimentaron una extraordinaria expansión desde mediados de la década de 1980 en adelante, y sólo disminuyeron su crecimiento a principios del siglo XXI, cuando las secuelas negativas de la onda recesiva de la economía estadounidense las obligaron a recortar la planta industrial y cerrar incluso algunos establecimientos.<sup>19</sup>

<sup>14</sup>El *boom* petrolero del periodo 1979-1981 permitió a México retardar ficticiamente por unos años el severo impacto de la crisis.

<sup>15</sup>La moneda se devaluó cerca de 40 veces entre 1982-1986; la inflación rebasó el 100 por ciento, mientras la tasa de desempleo abierto llegó al 12 por ciento a mediados de 1983 (Ros, 1985).

<sup>16</sup>Se estima que en esos años, el porcentaje de ocupación manufacturera en establecimientos fijos descendió del 46 al 37 por ciento (Olivera Lozano, 1997).

<sup>17</sup>A diferencia de la ciudad de México, Monterrey lograría años después relanzar un proceso de reestructuración exitoso y revertir parte de la tendencia desindustrializadora (Alba, 1998).

<sup>18</sup>De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, en el año 2000 el sector industrial absorbía al 19.3 por ciento de la fuerza de trabajo.

<sup>19</sup>Entre 1980 y 1998, el número de empleados en la maquila pasó de 101,020 a 817,877; en el año 2000 sobrepasaba el millón (1'307,982). Sin embargo, por efecto de la recesión estadounidense se per-

Otra de las tendencias que se ha afirmado con más fuerza en las décadas postreras del siglo xx ha sido la creciente terciarización de la economía. Entre 1980 y 2000 el porcentaje de fuerza de trabajo alojada en el sector servicios no ha dejado de crecer, absorbiendo en este último año alrededor del 52 por ciento de la población ocupada (ENE, 2000).<sup>20</sup> La ampliación del terciario ha seguido una pauta diferencial según las regiones: entre 1980 y 1998 creció mucho menos en los estados del norte (Chihuahua, Coahuila y Durango) que en los de las regiones Golfo (Veracruz y Tabasco), Peninsular (Campeche, Quintana Roo, Yucatán) y Pacífico Sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) (Salas, 2003).<sup>21</sup>

Como sucede en otros contextos sociales, la progresiva ampliación del terciario ha ido de la mano de la creciente feminización de la fuerza de trabajo. La presencia relativa de mujeres no ha dejado de aumentar desde la década de 1970, verificándose una duplicación de sus tasas de participación económica entre 1970 y 2000. En el año 2000 el índice de feminización era de 51.85 mujeres por cada 100 hombres, una magnitud realmente importante si se considera que el porcentaje de mujeres en el conjunto de la fuerza de trabajo oscilaba en ese año alrededor del 35 por ciento (Ariza y Oliveira, 2003).

Después de la aguda contracción durante el lapso de 1982 a 1988, la economía empezó a dar visos de recuperación a principios de la década de 1990, pero en 1994 una nueva onda recesiva sumió al país en la crisis económica más severa de que se tiene memoria en los últimos años. El producto interno bruto se contrajo en casi un 7 por ciento, la moneda se devaluó un 44 por ciento, la inflación se elevó al 52 por ciento; el desempleo abierto, históricamente bajo en México, alcanzó la cifra récord de 7.6 por ciento en agosto de ese año, magnitud sólo equiparable a los valores alcanzados en los momentos más severos de la crisis de la deuda. Ese mismo año, 22,186 empresas suspendieron sus cotizaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (García, 1996), los salarios mínimos se redujeron en un 12 por ciento, y los correspondientes a los grandes establecimientos manufactureros en un 20 por ciento, quedando sin efecto la frágil recuperación lograda entre 1991-1993 (Zepeda, 2002). La devaluación del orden del 100 por ciento en 1995 terminó por apuntalar el nuevo patrón de crecimiento forjado a principios de la década de 1980, contribuyendo a reestructurar los sectores productivos, la competitividad de las empresas y los costos de la fuerza de trabajo,

---

dieron 226,000 empleos y se cerraron 253 establecimientos entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001 (Fleck, 2001; Carrillo y De la O, 2003, e INEGI, 2002).

<sup>20</sup> En el año 1979, el porcentaje de trabajadores en el conjunto de los servicios apenas llegaba al 34.2 por ciento (Oliveira, Ariza y Eternod, 2001).

<sup>21</sup> En el caso de la región Peninsular la expansión –medida a través de la participación en el PIB regional– fue extraordinaria: del 28.8 al 70.8 por ciento entre 1980 y 1998. Dicho crecimiento se relaciona claramente con el desarrollo del turismo, la llamada “industria sin chimenea” (Salas, 2003).

como una de las principales “ventajas comparativas” que ofrece el país a escala internacional (Bendesky, 2003).

A partir de 1996 y hasta 2000 al menos, se abre un periodo de breve repunte observable en la recuperación relativa de los salarios, la que no alcanzó a remontar los niveles previos a la crisis de mitad de la década.<sup>22</sup> Los primeros años del siglo XXI marcarán, sin embargo, un nuevo intervalo de estancamiento económico detonado en parte por los efectos económicos recesivos del 11 de septiembre en la economía estadounidense. De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo, entre 1995 y 1998 el producto interno bruto creció a una tasa media anual de 5.6 por ciento, mientras la población ocupada lo hizo al 4.5 por ciento, lo que redujo la tasa de desempleo abierto hasta el 3.2 por ciento en 1999 (STPS, 2000). Pero esta mejoría no se tradujo en una elevación de las condiciones laborales. Así, entre 1995 y 1998, la *tasa de condiciones críticas de ocupación* (TCCO) que mide la proporción de población en situación precaria,<sup>23</sup> se mantuvo estable en 23.8 por ciento (STPS, 2000). Algunos indicadores como el porcentaje de trabajadores sin prestaciones sociales, que en México se sitúa por encima del 55 por ciento, o de aquellos que devengan menos de dos salarios mínimos al mes –por encima del 60 por ciento de la población trabajadora– arrojan un panorama todavía menos esperanzador.

Las transformaciones señaladas han tenido como consecuencia un incremento gradual de los trabajadores no asalariados (principalmente cuentapropistas y familiares no remunerados) en el conjunto de la fuerza laboral, los que a finales de la década de 1990 constituyen alrededor del 37 por ciento del conjunto de los ocupados. Muchos de estos aspectos resultan más inteligibles al echar una rápida mirada a la evolución reciente del sector informal.

#### El caso del sector informal

Ya en la década de 1980, como consecuencia de la severa crisis vivida desde principios de la década, el sector informal empezó a absorber una parte importante de la fuerza de trabajo urbana. Dependiendo de los criterios utilizados, las estimaciones más habituales oscilaban entre el 25 y el 35 por ciento de la fuerza laboral en los últimos años de la década<sup>24</sup> (Jusidman, 1993). A mediados de la década de 1990, y como consecuencia de la extrema sensibilidad de este sector

<sup>22</sup>Se estima que el salario mínimo real del año 2000 representa tan sólo una tercera parte del monto de 1980 (Zepeda, 2002).

<sup>23</sup>Engloba a la que trabaja menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos al mes, o que trabaja más de 33 horas semanales con ingresos inferiores al salario mínimo.

<sup>24</sup>Sin embargo, una encuesta realizada en 1976 con la finalidad expresa de medir informalidad en el nivel de los hogares, arrojó una cifra del 38 por ciento (Jusidman, 1993).

a las fluctuaciones económicas, el porcentaje de trabajadores informales<sup>25</sup> se colocó por encima del 44 por ciento de la población urbana para volver a descender una vez superado el momento crítico de la mitad del decenio (véase cuadro 3). Si en vez del criterio tradicional aquí empleado, que combina el tamaño de establecimiento con la situación en el trabajo (cuenta propia, asalariado, no remunerados), se recurre a una concepción alternativa en la que se incluye a los asalariados sin prestaciones, el porcentaje de informalidad en México asciende al 49.8 por ciento en el año 2000. Por razones de comparabilidad con la información ya generada en el país, conservamos en lo esencial el criterio tradicional.

El comportamiento descrito por el sector informal a lo largo de estos periodos de sucesivas crisis y recuperaciones económicas parece confirmar su carácter contracíclico: expansión en momentos de crisis y relativa contracción en los de crecimiento. En el año 2000, y a pesar de la reducción en la participación del sector informal en el conjunto de la economía, todavía más de 7 millones de personas, de un total de 19 millones, 515,000 que conformaban la población ocupada generaban su ingreso en el circuito informal de la economía (véase cuadro 3). Las mayores tasas de informalidad se encuentran en el comercio al menudeo –un subsector, dicho sea de paso, extraordinariamente feminizado–, y los servicios, sobre todo hoteles y restaurantes. Ambos sectores –comercio en general y servicios– alojan más de las dos terceras partes de todos los informales urbanos tanto a principios como a finales de la década de 1990 (datos no proporcionados en los cuadros).

Con base en la Encuesta Nacional de Micronegocios de 1998 (ENAMIN), es posible conocer algunas de las características de los establecimientos de hasta seis personas.<sup>26</sup> De acuerdo con ella, alrededor del 35 por ciento del total del empleo urbano tiene lugar en este tipo de negocios. La abrumadora mayoría de éstos, el 84 por ciento, son unipersonales o utilizan trabajadores familiares a los que no otorgan remuneración alguna (INEGI, 2000).

Datos de la misma encuesta levantados durante los años 1992, 1994, 1996 y 1998 dan cuenta de la evolución seguida por los micronegocios en la última dé-

<sup>25</sup>El concepto empírico de sector informal que se maneja aquí es una combinación del criterio del tamaño de establecimiento con el de situación en el empleo. Incluye a los empleadores, asalariados y trabajadores a destajo que laboran en establecimientos con cinco o menos personas; a los trabajadores domésticos, a los cuentapropistas, y los sin pago. De la categoría de trabajadores en empresas con hasta cinco personas se excluye a los que se encuentran en ramas que se definen como formales. De los cuentapropistas y trabajadores sin pago, se excluye a los profesionistas, considerados no informales, y a los trabajadores domésticos para evitar una doble contabilización (STPS, 2000). Esta es por lo demás la definición empírica usada tradicionalmente en las fuentes de información en México.

<sup>26</sup>Se trata de una encuesta mixta de hogares y establecimientos, representativa de todas las áreas urbanas de 100,000 habitantes y más.

CUADRO 3  
EVOLUCIÓN DEL SECTOR INFORMAL, 1993-1998 MÉXICO, ÁREAS URBANAS  
(100,000 habitantes y más)

<i>Dimensión</i>	<i>Población ocupada</i>	<i>Sector formal</i>	<i>Sector informal</i>
Población ocupada (en miles de personas)			
1993	14,923	9,141.9	5781.1
1995	15,161.2	8,445.5	6715.7
2000	19,515.1	12,580.1	7093.1
Tasa de participación			
1993 (%)	100.0	61.3	38.7
1995 (%)	100.0	55.7	44.3
2000 (%)	100.0	63.3	36.7
Tasa de crecimiento media anual			
1993-1995 (%)	0.8	-3.9	7.8
1995-1998 (%)	5.8	7.4	3.6
1998-2000 (%)	4.3	9.6	-2.6

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2000) y Encuesta Nacional de Empleo (2000).

cada del siglo xx: *a*) aumento de los trabajadores por cuenta propia, con ritmos anuales de entre el 7 y el 8 por ciento, y descenso de los asalariados (Román, 2001); *b*) crecimiento de los establecimientos que poseen un solo trabajador (del 59 al 65 por ciento), así como de los que trabajan sin local; *c*) incremento de las unidades económicas que declaran pérdidas; y *d*) incremento del porcentaje de trabajadores que dedica más de 48 horas semanales a la actividad (Román, 2001).

Los aspectos reseñados reafirman la naturaleza extraordinariamente precaria de estas pequeñas unidades económicas, cuya proliferación colma casi por completo el universo de los informales. Revelan también que aun así, para ciertos sectores sociales, estas frágiles y precarias unidades económicas constituyen una mejor opción que el trabajo asalariado.

#### *La probabilidad de ser un informal en México en el año 2000*

Si el sector informal constituye una opción laboral tan importante para millones de mexicanos, conviene conocer qué población está más expuesta al riesgo de encontrar su reproducción económica dentro de él. El cuadro 4 recoge los resultados del ajuste de dos modelos de regresión logística para medir la probabili-

dad de ser un trabajador informal en el año 2000.<sup>27</sup> El primer modelo comprende una serie de variables individuales de carácter sociodemográfico: sexo, edad, escolaridad y relación de parentesco con el jefe de hogar. El segundo incorpora a estas dos variables de mercado: el tipo de ocupación (manual o no manual) y la rama de actividad económica. Este segundo modelo mejora sustantivamente la capacidad explicativa del primero.<sup>28</sup>

En lo que se refiere a los rasgos sociodemográficos, queda claro que –en contra de lo que pudiera sugerir el sentido común– ser hombre y no mujer tiene un impacto positivo y moderado en la probabilidad de llegar a ser un trabajador informal en las zonas más urbanizadas del país.<sup>29</sup> Lo mismo sucede si se está en una situación de parentesco distinta a la de jefe del hogar. Estos resultados no dejan de ser llamativos pues la mayor probabilidad relativa de los hombres respecto de las mujeres pone en entredicho asociaciones habituales entre informalidad y trabajo femenino, muy vinculadas a la acentuada feminización de actividades como el comercio (en pequeña escala) y el terciario en general. A su vez, el hecho de que –controlados los demás factores– cuando un hombre o una mujer se encuentran en una posición distinta a la del jefe del hogar aumente la probabilidad de ser un trabajador informal, sugiere que esas situaciones familiares permiten sobrellevar mejor la inestabilidad económica inherente al trabajo informal. En lo que concierne a la escolaridad, contrastados contra el nivel máximo (16 años o más), todas las categorías educativas inciden positiva y muy fuertemente en la posibilidad de convertirse en un trabajador informal; como era de esperarse la magnitud de los coeficientes incrementa de manera considerable conforme descendemos en la pirámide educativa. De este modo, cuando una persona carece de escolaridad, la probabilidad de que se encuentre laborando en el circuito informal de la economía es 18 veces mayor que si tiene al menos 16 años de estudio aprobados. Estos datos son coherentes con los cambios ocurridos en el mercado de trabajo en términos de una

<sup>27</sup>Se corrieron los mismos modelos tanto para la definición “tradicional” (que combina tamaño de establecimiento y situación en el trabajo) como “alternativa” (incluye a los asalariados sin prestaciones) de informalidad, aunque por razones de comparabilidad con lo expuesto en la primera parte de este acápite y con la tradición de investigación en el país, se presentan sólo los resultados obtenidos con base en la medición tradicional, acotando en cada momento las pocas diferencias encontradas entre ellos. De ambas definiciones se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson, el que mostró una alta asociación entre ellas (0.714), lo que quiere decir que –a pesar de sus discrepancias– recogen una serie de factores comunes y apuntan a medir esencialmente el mismo fenómeno. No obstante, dado que la definición alternativa incluye a los asalariados sin prestaciones, se encuentra más a tono con los cambios ocurridos en el mercado de trabajo en los últimos años.

<sup>28</sup>La contrastación entre ambos modelos se realizó a través de una Chi cuadrada comparando la disminución en la función de verosimilitud. La variable dicotómica dependiente es 0 = formal, 1 = informal.

<sup>29</sup>En la delimitación que realiza la Encuesta Nacional de Empleo, las zonas más urbanizadas del país son las que tienen 100,000 habitantes y más.

CUADRO 4  
 COEFICIENTES DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA EL SECTOR INFORMAL,  
 MÉXICO, ÁREAS MÁS URBANIZADAS  
 (Medición tradicional)

<i>Variables</i>	<i>Modelo 1</i>		<i>Modelo 2</i>	
	<i>Coefficientes B</i>	<i>Exp (B)</i>	<i>Coefficientes B</i>	<i>Exp (B)</i>
Sexo				
Hombre	0.105*	1.111	0.055*	1.056
Mujer	-----		-----	
Edad				
12 a 24	-----	-----	-----	-----
25 a 34	0.023*	1,024	0.011*	1,011
35 a 44	0.170*	1,185	0.177*	1,193
45 a 54	0.350*	1,419	0.408*	1,503
55 y más	0.699*	2,012	0.742*	2,101
Escolaridad				
Ninguno	2,891*	18,016	1.777*	5,914
1 a 6 años aprobados	2,519*	12,419	1.501*	4,487
7 a 9 años aprobados	1,962*	7,112	1.032*	2,805
10-12 años aprobados	1,457*	4,293	0.672*	1,958
13 a 15 años aprobados	1,343*	3,829	0.730*	2,075
16 años y más	-----*	-----	-----*	-----
Relación de parentesco				
Jefe	-----*	-----	-----*	-----
Cónyuge	0.450*	1,568	0.478*	1.613
Hijos del jefe	0.177*	1,194	0.203*	1.225
Rama de actividad económica				
Manufactura		-1.379*	0.252	
Construcción, electricidad, agua, gas		-0.294*	0.745	
Comercio y servicios	-----*	-----*		
Ocupación				
No manuales calificados		-1.944*	0.143	
No manuales semicalificados		-1.648*	0.192	
No manuales		-0.414*	0.661	
Manuales		0.162*	1.176	
Manuales no calificados		-----*		
2 log Likelihood	122,985.258	112,896.457		
Nagelkerke R square	.180	.289		

\* Significativas con 95 por ciento de confianza.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, II trimestre, INEGI.

mayor selectividad educativa de la fuerza de trabajo, en particular de la que se ubica en el circuito formal de la economía, la que entre 1991 y 1999 albergaba –de acuerdo con Llamas y Garro (2003)– tres veces más trabajadores capacitados que el sector informal.

En cuanto a la edad, a partir de los 35 años se incrementa gradual y sostenidamente la probabilidad de llegar a ser un trabajador informal en México, pero es al atravesar el umbral de los 55 años cuando la probabilidad se duplica.<sup>30</sup> Estudios previos realizados en el país han documentado una suerte de trayectoria laboral desde el trabajo asalariado al trabajo por cuenta propia, que se efectúa preferentemente en los años postreros de la vida económicamente activa (Pries, 1993). Asimismo, datos provenientes de la Encuesta de Micronegocios antes referida, muestran cómo el anhelo de conseguir una mejor remuneración que la del trabajo asalariado, el deseo de independencia y de contribuir más al ingreso familiar, son tres de los móviles más señalados por los entrevistados a la hora de explicar por qué se decidieron a establecer un micronegocio.

Al incorporar las variables de mercado (rama de actividad y tipo de ocupación), las características individuales conservan su sentido aunque disminuyen su magnitud (con excepción de la relación de parentesco). Como era posible anticipar, encontrarse en la manufactura en vez de en el comercio o los servicios, impacta negativamente la probabilidad de ser informal, no obstante que –como sabemos– muchas de las actividades del sector manufacturero han sufrido una suerte de informalización *de facto*. Trabajar en actividades económicas dentro del sector de la construcción, agua, gas y electricidad, también disminuye dicha probabilidad, aunque menos.<sup>31</sup> En lo que concierne a la ocupación, contrastadas contra las manuales no calificadas, las actividades no manuales disminuyen el chance de ser informal, mientras las manuales la aumentan en al menos una vez.

Los aspectos señalados resumen el perfil de la fuerza de trabajo con mayor probabilidad de ser informal en México en el año 2000: masculina, mayor de 35 años, de baja o media escolaridad, que no se encuentre en condición de jefe de hogar, y que halle inserción laboral en alguna de las ocupaciones manuales de los servicios o el comercio.

<sup>30</sup> Este es el único aspecto que marca (en algunas categorías de la variable) una diferencia con el ajuste obtenido con base en la “definición alternativa” de informalidad. De acuerdo con ella tener de 25 a 34 o de 35 a 44 años (en lugar de 12 a 24) disminuye (en vez de elevar) la probabilidad de ser informal. Cuando se tiene 55 años o más, sin embargo, el comportamiento de la variable es positivo en ambos conjuntos de resultados (datos no contenidos en los cuadros).

<sup>31</sup> Este es el otro punto de discrepancia con la medición realizada a partir de la definición alternativa, pues en ella los trabajadores de la construcción (y demás actividades del sector) tienen un chance 1,488 veces mayor de ser informales que los que se encuentran en el comercio y los servicios (datos no presentados en los cuadros).

## Escenarios económico-sociales de la vida urbana: violencia urbana y movilización popular por la vivienda

La conformación de México en un país netamente urbano y metropolitano, en el que cerca del 40 o el 50 por ciento de la fuerza de trabajo de las ciudades (dependiendo del criterio utilizado), sobrevive en el circuito informal de la economía, en actividades de muy baja productividad, esencialmente unipersonales y de sobrevivencia, ha estado acompañada de la irrupción de inéditos escenarios sociales: la escalada sin precedentes de la violencia urbana; y el clímax y la subsecuente desmovilización política de la reinvidicación popular por la vivienda.

En ambos tipos de procesos han incidido tanto factores estructurales –delineados en los acápites precedentes– como institucionales y políticos, contingentes en cierto modo al contexto particular por el que ha transitado el país en las últimas décadas. En el caso de la violencia urbana, qué duda cabe de que las reiteradas crisis económicas que han minado la capacidad de sustento de los hogares constituyen un factor de capital importancia, pero lo es también el deterioro de la vida institucional manifiesto en la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas, sobre todo las de seguridad y justicia, la generalización de la corrupción, y la continua deprivación relativa a que da lugar la imposibilidad manifiesta de participar como miembro de pleno derecho en la sociedad de consumo. En el caso de la movilización popular urbana son otros los factores que ganan relevancia, entre ellos: la acusada factura corporativo-clientelar del Estado mexicano, su extraordinaria capacidad de cooptar a los actores políticos, y el proceso más general de transición política hacia la democracia; sin descartar aspectos coyunturales del todo imprevisibles como el sismo de 1985, con un efecto catalizador sin precedentes sobre las posibilidades de movilización.

En lo que sigue nos abocaremos a la descripción de estos dos grandes escenarios económico-sociales, la violencia urbana y la movilización popular por la vivienda, procurando en cada caso trazar tanto las tendencias generales como los procesos emergentes.

### *Violencia e inseguridad social*

#### Aspectos generales de la violencia urbana en México

Las muertes violentas han crecido extraordinariamente en México no sólo producto de la creciente criminalidad e inseguridad social, sino de la modificación en la estructura general de la mortalidad producto del avance en la transición demográfica (Bringas, 1990). En efecto, el paso del predominio de las enfermedades infecciosas a las crónico-degenerativas, junto al descenso considerable de las tasas

brutas de mortalidad propiciado por el cambio demográfico secular, han permitido que ganen relevancia las defunciones por causas sociales –como las violentas– en la estructura general de los decesos en México. Se estima así, que si a mediados del siglo xx ellas explicaban sólo el 5.5 por ciento del total de las defunciones, 35 años después, en 1985, eran responsables del 15 por ciento (Bringas 1990).

En esas décadas (1950-1985), sin embargo, el ascenso de la violencia en la jerarquía de las causas de muerte se explicaba más por el rápido incremento de los accidentes de transporte y vehículos de motor que por la tasa de homicidios, pues ésta –si bien era alta– había experimentado en el periodo en cuestión (1950-1985) su mayor caída histórica (Bringas, 1990). No obstante, a partir de 1985 la historia dio un giro inesperado con el ascenso gradual pero sistemático de las defunciones por homicidio, cuyo episodio más dramático ha tenido lugar en el último lustro de la década de 1990.

Algunas cifras arrojadas por la Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas (ICESI, 2002) permiten forjarse una idea de la situación actual. En los albores del siglo xx, esto es, en el año 2001, al menos un miembro del 14 por ciento de todos los hogares mexicanos fue víctima de un delito; en números absolutos ello representa alrededor de 4.2 millones de mexicanos. De estos delitos, cerca de la mitad (44 por ciento) fueron cometidos con violencia, siendo el arma de fuego la más frecuente (44 por ciento). Casi la totalidad de las acciones delictivas resultaron del fuero común, y es el robo el que hegemoniza la mayoría de ellas (92 por ciento). Éste se comete casi siempre contra transeúntes (61 por ciento), y sólo en el 5 por ciento de los casos contra comercios establecidos. En términos de costos, se estima que las pérdidas que en el año 2001 el conjunto de delitos ocasionó al país equivalen al 0.85 del PIB (49,000 millones de pesos), evaluación que a nivel individual representa un costo aproximado de 13,245 pesos por víctima (alrededor de 1,200 dólares) (ICESI, 2002).

Otro rubro en el que el país destaca poco meritoriamente es el secuestro. Aun cuando México figura como la segunda nación con mayor número de secuestros en el mundo, si se excluyen aquellos países en situación de guerra, se desplaza rápidamente al primer lugar (ICESI, 2002). Así, en el año 2000 se cometieron 642 secuestros o plagios, algunos de los cuales culminó con el asesinato de la víctima.<sup>32</sup> La misma fuente aquí citada destaca dos de los rasgos recientes que ha adquirido este ilícito: la persistencia de niveles elevados, en especial en algunas entidades federativas; y el creciente grado de crueldad con que se co-

<sup>32</sup>Estos datos provienen de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública A.C. Fueron recabados a partir de fuentes de diversas: periódicos, datos de algunas procuradurías, e informes de sus propias organizaciones, por lo que su confiabilidad es limitada. El sector empresarial se queja de la poca transparencia del Estado en lo que se refiere a la delincuencia, y en particular, a los secuestros. El empresariado mexicano, blanco continuo de estos ilícitos, se ha organizado para enfrentarlos.

mete. La mutilación, la tortura y los malos tratos, son prácticas habituales en la perpetración de estos actos delictivos (ICESI, 2002).

A pesar de la importancia relativa del secuestro en relación a su incidencia en otros países, si se echa una mirada a la distribución de los delitos violentos cometidos en México en el año 2002, estimados en 442,772 ilícitos, se observa que son el robo con violencia (42.55 por ciento) y las lesiones dolosas (51.15 por ciento) los que totalizan más del 90 por ciento de ellos (véase cuadro 5). En el caso del primero, se trata en su mayoría de asaltos a transeúntes (39.31 por ciento) y de sustracciones de vehículos (32.73 por ciento), rubro en el cual México ostenta el octavo lugar a nivel mundial en números absolutos (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, 2002). La magnitud de estos delitos nos proporciona una clara idea de que el principal móvil de la acrecentada violencia urbana en el México de nuestros días es el daño patrimonial; es decir, el ilícito que se practica con la finalidad de hacerse del patrimonio o la propiedad de otros, por lo que se trata esencialmente de una “violencia económica” (Concha-Eastman, 2002).<sup>33</sup>

CUADRO 5  
DELITOS VIOLENTOS EN MÉXICO, 2002\*

<i>Tipo de delito</i>	<i>Abs.</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>%</i>
Secuestros	437		0.10
Homicidios dolosos	13,016		2.94
Violaciones	14,433		3.26
Robo con violencia	188,419		42.55
Lesiones dolosas	226,467		51.15
Total	442,772		100.00
<i>Composición del robo con violencia</i>			
Robos de vehículos	64,185		32.73
Asaltos transeúntes	77,096		39.31
Asaltos casa habitación	21,542		10.98
Asaltos a negocios	21,065		10.74
A transportes de carga	12,242		6.24
Total	196,130		100.00

\*Se refiere a delitos del fuero común denunciados. Estimaciones con base en los 11 meses del año 2001.  
Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., México, D.F., 2003a.

<sup>33</sup>De acuerdo con el autor citado (Concha-Eastman, 2002: 47), la violencia económica *per se* es la que posee escasa estructura organizativa y se realiza en contra de la población en general. La perpetrán bandas de delincuentes comunes, aunque hay también quienes actúan individualmente. Consiste básicamente en robos, homicidios, violaciones, peleas y asesinatos. Cuando la violencia económica incluye algún elemento de poder, el crimen adquiere un carácter más estructurado y las víctimas son objetivos seleccionados. Tal es el caso de las bandas de narcotraficantes.

Aun cuando puede decirse que esta mayor incidencia delictiva es un rasgo que envuelve a toda la sociedad mexicana, la información disponible permite delinear algunas diferencias territoriales. Sobresalen así el Noroccidente, el Centro-Norte, Centro-Sur y el valle de México, como las regiones más violentas (Villareal, 2002). En coherencia con ello, son el Distrito Federal, Morelos y el estado de México (en el Centro); Chihuahua y Baja California (en el Norte y Noroeste); Guerrero, Tabasco (Centro Golfo), Quintana Roo (Peninsular), y Nayarit y Jalisco (en el Noroccidente), los 10 estados que ostentaban en el año 2001 los mayores índices delictivos (véase gráfica 2; ICESI, 2002). En el extremo opuesto se encuentran Durango, Zacatecas, Colima, Puebla y Tlaxcala, como las entidades de más baja incidencia (ICESI, 2002). Para dar sólo un ejemplo, el 71.4 por ciento de todos los secuestros denunciados en México en el año 2000 se cometieron en tres ciudades: México, Cuernavaca, y Guerrero, la mayoría de ellos, por supuesto, en el Distrito Federal (46.3 por ciento) (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Coparmex, e IMECO, 2002); este aspecto habla de una concentración espacial del comportamiento delictivo coherente con el lugar preeminente de la ciudad de México y la región centro en el mapa urbano nacional.

Producto del escenario que acabamos de describir, el 47 por ciento de los mexicanos se siente inseguro en el lugar en que reside y, naturalmente, son los habitantes del Distrito Federal los que muestran un mayor grado de desconfianza respecto de la seguridad en su ciudad (80 por ciento). Es quizás este aspecto lo que explica el que confrontados con la pregunta “¿Si tuviera la oportunidad le gustaría vivir en otro lugar fuera de la ciudad de México?”, la mayoría de los capitalinos (57 por ciento) contestara que sí<sup>34</sup> (Termómetro Capitalino, *Este País*, 2000). El mismo escenario ha ocasionado además que cerca de una cuarta parte (23 por ciento) de la población haya modificado sus hábitos de vida con la finalidad de evitar un segundo (o tercer) episodio.

Obviamente, los aspectos mencionados guardan relación con los altos niveles de impunidad en el país, cuyos valores nacionales sobrepasan el 90 por ciento. Se estima que la tasa de delitos aclarados, con presentación de presuntos responsables, no alcanza al 15 por ciento de total de delitos cometidos en la República (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, 2003b). Este aspecto, la poca capacidad de respuesta institucional del Estado para proveer un entorno cotidiano de seguridad a los habitantes de las ciudades (de garantizarles el derecho a la “seguridad ciudadana”),<sup>35</sup> o de proporcionar al menos una sanción

<sup>34</sup> Al 43 por ciento le gustaría vivir en otra ciudad y al 14 por ciento en el extranjero.

<sup>35</sup> De acuerdo con Concha-Eastman (2002: 45), el concepto de seguridad ciudadana alude al derecho que todo ciudadano tiene de moverse libremente y sin miedo, de saber que no le serán quitadas sus propiedades y pertenencias, que no será fraudulentamente desprovisto de sus bienes, que no será intimidado, y que pueden confiar en otros seres humanos tanto como lo hace con las personas cercanas a él (traducción propia).

punitiva a los que delinquen, es en sí mismo un factor que multiplica las posibilidades de ocurrencia de la violencia urbana en el mediano plazo, pues a mayor nivel de impunidad, mayor probabilidad de que se reedite el ciclo perverso de la criminalidad (Concha-Eastman, 2002).

#### El perfil de la inseguridad en la ciudad principal

Aunque con breves inflexiones en algunos años, la tendencia general del índice delictivo en el Distrito Federal en las dos últimas décadas del siglo xx ha sido también la de un ascenso ininterrumpido. Entre 1983 y 1988 se observó un primer incremento, que –de acuerdo con las fuentes oficiales (PDJDF e INEGI)– descendió ligeramente entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. A partir de ahí, sin embargo, el aumento ha sido constante. Los datos muestran una inusitada elevación del índice delictivo en el lapso de 1994 a 1997, justo los años que comprenden la crisis económica de fin de siglo (Banco Mundial y Fundación Mexicana para la Salud, 1999). Si a principios de la década de 1990 la tasa de crecimiento anual de los delitos fue del 2.2 por ciento, tan sólo en 1995 fue del 35.4 por ciento. Los niveles alcanzados ese año fueron alarmantes, pues supusieron el paso de 180,000 a 252,000 delitos de un año a otro (BM y FMS, 1999).

Tal y como ocurre a nivel nacional, la espiral delictiva obedece sobre todo a la expansión de un tipo de delito: el robo (BID, 1998; Banco Mundial y FMS, 1999; ICESI, 2002). A juzgar por los datos, es la propia colonia en que residen el lugar en que los ciudadanos están más expuestos a una agresión, pues en el 43 por ciento de los casos el asalto ocurrió dentro de sus márgenes (Banco Mundial y FMS, 1999). Este hecho confirma que el espacio barrial se ha convertido en un entorno amenazador para sus habitantes. En coherencia con el perfil habitual, tanto víctimas como agresores son fundamentalmente hombres, aunque en el caso de estos últimos el porcentaje es mucho más alto (83 por ciento). Se trata también en la mayoría de los casos de personas jóvenes (61 por ciento) (BM y FMS, 1999). Más de la mitad de los robos que se perpetran en el Distrito Federal se realizan en presencia de la víctima y, de acuerdo con las estimaciones del BID (1998), esto es causa a su vez de 25,000 delitos más.

Las distintas informaciones recabadas han permitido trazar un mapa de la ciudad según el nivel que alcanzan los índices delictivos.<sup>36</sup> Como era de esperarse, la más alta incidencia (tasas superiores a los 2,000 delitos por 100,000 habitantes) corresponde al centro de la ciudad. En él es la delegación Cuauhtémoc la que presenta mayor peligrosidad social, con una tasa de 7,989 delitos por

<sup>36</sup> Esta clasificación fue realizada por el Banco Mundial en el informe ya citado.

cada 100,000 habitantes en 1997. Las delegaciones de menor índice delictivo (menos de 1,000 delitos por cada 100,000 habitantes) se encuentran en el extremo opuesto y colindan con la zona sur de la ciudad. Tienen un crecimiento poblacional lento (menos de 1,000 delitos por cada 100,000 habitantes), y mucho menos actividad comercial que las restantes; destacan entre ellas Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco.

Un rasgo insistentemente destacado por las fuentes consultadas es el carácter crecientemente organizado de los delitos que se cometen en la ciudad de México, los que se acompañan cada vez más del uso de estupefacientes y de armas de fuego. Oscila entre dos y tres el número de personas que en promedio agreden a un individuo con la intención de robarle. Entre los delitos organizados que más asolan a la ciudad de México figuran los secuestros y los asaltos bancarios. Los primeros son realizados no sólo en contra de personas acaudaladas, sino de medianos comerciantes o incluso de transeúntes a los que se les priva de libertad por unas horas con la finalidad de agotar las posibilidades de retiro de sus tarjetas bancarias (el llamado “secuestro express”).

Todos estos aspectos contrastan con la baja tasa de denuncia de los habitantes de esta gran urbe. De acuerdo con la Encuesta de Victimización señalada, sólo el 17 por ciento de las víctimas de la ciudad de México se tomó el trabajo de denunciar el delito ante alguna autoridad competente. El Distrito Federal encabeza a los estados con menores tasas de denuncia, que son también los más violentos; le siguen el estado de México, Guerrero y Morelos (Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, 2001-ICESI, 2002).

### **La movilización popular urbana por la vivienda: efectos urbanos de las organizaciones populares en México, 1980-2002**

En los últimos 20 años, las organizaciones populares independientes de la sociedad mexicana han atravesado por cuatro fases principales: a principios de la década de 1980, las campesinas, urbano-populares, obreras, magisteriales y de comunidades eclesiales de base lograron su consolidación sectorial y la creación de sus respectivas coordinadoras. A mediados de la década de 1980, esos cinco movimientos y sus coordinaciones pasaron por una fase de reflujo y erosión, pero emergieron los innovadores movimientos de damnificados. A finales de la década de 1980, se refuncionalizó una parte de estos movimientos (por ejemplo, los productores rurales y los grupos urbano-populares) y proliferaron diversos tipos de ONG. Y durante la década de 1990 y a principios del nuevo milenio, acusan pérdida de dinamismo y de combatividad los principales movimientos aludidos y surgen otros nuevos, entre ellos: dos de campesinos (“El Barzón” y

Atenco); uno, indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y uno de corte ciudadano (la “Alianza Cívica”). Estas cuatro tendencias demuestran las oscilaciones por las que han pasado dichas organizaciones (Ramírez Sáiz y Regalado, 1997).

Durante el mismo periodo, las ciudades mexicanas siguieron siendo los ámbitos en los que en mayor grado han emergido la organización y la protesta sociales. En particular, la vinculación entre urbanización y sectores populares se encuentra relacionada con la existencia de grupos, que con diferentes grados de identidad, integración y politización, convierten la tierra, la vivienda y los servicios urbanos básicos en objetos específicos y directos de demanda y de lucha sociales. Es decir, los grupos urbano-populares operan como recursos organizativos para adquirir tierra, vivienda y servicios básicos y, bajo este aspecto, como agentes urbanos. Todavía se encuentra pendiente la justa valoración del impacto urbano que las organizaciones corporativas vinculadas al PRI (Partido Revolucionario Institucional) han tenido en el desarrollo de las ciudades mexicanas. En este apartado, abordamos los efectos urbanos de las organizaciones urbano populares (OUP) independientes. Su independencia se basa en la autonomía orgánica, ideológica y operativa respecto del gobierno y de los partidos políticos. En el balance de su influencia urbana, existen dos posiciones básicas encontradas. Una los juzga como causantes directos y principales de la anarquía urbana; y otra ve en ellos las únicas respuestas generadas a las necesidades habitacionales de las mayorías. En realidad, su impacto urbano es diferencial, dependiendo de qué tipo de organización se trate. En la mayor parte de literatura disponible sobre este tópico se alude principalmente a las constituidas por “colonos”. Pero desde mediados de la década de 1980 han demostrado también fuerza social las organizaciones de inquilinos, las de damnificados de desastres urbanos, las de solicitantes de crédito para vivienda y los grupos de mujeres.

El periodo de estudio considerado es de 1980 a 2002. En este lapso, emergen las formas más estructuradas de las organizaciones urbano populares (OUP) independientes y se despliegan sus formas de acción paradigmáticas. En él se evidencian también las limitaciones internas de que adolecen y los obstáculos externos a los que se enfrentan.

El balance que realizamos consta de tres partes. En la primera, aludimos a los elementos que operan como factores condicionantes y determinantes de la emergencia de las OUP. En la segunda, aportamos una breve visión nacional de ellas y de su impacto urbano. En la tercera, analizamos dos estudios de caso que corresponden al Área Metropolitana del Distrito Federal: el de los avecindados del centro y el de los solicitantes de vivienda en la periferia.<sup>37</sup> Se trata de dos ti-

<sup>37</sup> En esta parte del trabajo, la mayoría de las visitas de campo y de las entrevistas en el D.F. fueron realizadas por Marina Ariza y Miguel Ramírez Braulio.

pos de organizaciones distintas tanto en tamaño como en capacidad reivindicativa y política, cuyo impacto sobre la ciudad posee dimensiones muy diferentes.

### *Factores condicionantes y determinantes*

De los elementos intervinientes en el surgimiento de las OUP, unos son contextuales y otros causales directos. Los primeros están relacionados con la emergencia de dichos grupos pero no son estrictamente sus productores; los segundos son constitutivos de ellos. Las condiciones objetivas del contexto económico y político posibilitan, por una parte, y limitan, por otra, los márgenes de intervención de las OUP. En la literatura especializada se alude a los factores “facilitantes” como la “estructura de oportunidades” (McCarthy y Zald, 1987). En el caso de las OUP, ésta viene dada principalmente por las instituciones, las políticas y los recursos asignados a la vivienda popular. En el nuevo contexto económico y político del país el crédito de las instituciones gubernamentales de vivienda popular constituye uno de los pocos recursos disponibles para los pobres urbanos. Estos factores contextuales evidencian que en las ciudades mexicanas existen situaciones objetivas que pueden propiciar la protesta y el surgimiento de grupos que luchen por modificar sus condiciones materiales de vida urbana. Sin embargo, por sí mismos, estos elementos no originan la constitución de organizaciones ni la emergencia de acciones reivindicativas. Por ejemplo, la relación de los cambios en el modelo económico con la evolución de las OUP es real, pero no directa ni lineal, porque no obstante la persistencia de las crisis económicas durante el periodo de estudio, las organizaciones pasaron de un periodo de emergencia y de auge, a mediados de la década de 1980, a otro de deterioro posterior.

Además de la estructura de oportunidades aludida, los factores determinantes de la dinamización y politización de las OUP son las identidades creadas entre sus miembros, los esquemas de movilización utilizados y los proyectos formulados (Melucci, 1999; McCarthy y Zald, 1987; Tilly *et al.*, 1975; Tilly, 1995; Cohen y Arato, 2000). Estos son los factores decisivos para que emerjan las OUP; pero tampoco este principio es absoluto. La manera en que se lleve a cabo su estructuración y politización y, en particular, el tipo de relación que establezcan con los partidos políticos, pueden afectar su trayectoria, como aclaramos más adelante.

### *Las organizaciones urbano-populares a nivel nacional: los actores y sus efectos urbanos*

El Distrito Federal (D.F.) constituye el indisputado centro político-administrativo del país y el que condensa la mayor parte de la acción desplegada por las organizaciones populares. Pero así como en México la alternancia político-parti-

daria se inició en ámbitos alejados del centro (entre otros, en Oaxaca y de Baja California), las movilizaciones independientes no se reducen a las surgidas en la capital del país. En este apartado, caracterizamos esquemáticamente el conjunto de las distintas OUP surgidas en México y asentamos sus efectos habitacionales y urbanos.

En los integrantes de los cinco tipos de grupos de OUP aludidos (colonos, inquilinos, solicitantes, damnificados y de mujeres), predominan los trabajadores eventuales, los desempleados temporales y los vendedores ambulantes sobre los asalariados permanentes, los trabajadores independientes no asalariados, los artesanos y los pequeños comerciantes. Su nivel educativo o de escolarización tiende a crecer, en particular entre los solicitantes de crédito para vivienda.

El nivel de estructuración interna de estos cinco tipos de grupos es desigual. En algunos casos, es mínimo y se crea únicamente en función de obtener reivindicaciones inmediatas. En otros, da lugar a organizaciones estables bastante formalizadas, con definición de niveles, funciones y asignación de responsabilidades a través de comisiones. A diferencia de las organizaciones corporativizadas del PRI, en éstas los riesgos suelen ser el espontaneísmo, el asambleísmo y el ultraizquierdismo. Su estructura descentralizada no impide que coexistan tendencias a los liderazgos semicaudillescos o semicaciquiles.

En la trayectoria global de las OUP en el periodo deben resaltarse cuatro tendencias básicas: *a*) el recambio ocurrido entre los grupos urbano-populares analizados: de fundamentalmente colonos, al principio del periodo, a principalmente solicitantes de vivienda en la actualidad; *b*) su compleja transformación interna: de pequeños grupos locales a frentes amplios (de carácter regional, nacional e incluso internacional) y a su posterior desarticulación; *c*) los avances y retrocesos de sus formas de lucha: de ilegales a legales, de espontáneas a planeadas, de antielectorales a defensoras del voto y de independientes a corporativas y clientelares; y *d*) el ciclo regresivo por el que han transitado: de crecientemente movilizadas y politizadas a progresivamente desactivadas y desinteresadas en proyectos sectoriales e intersectoriales. Al final del periodo analizado, los cinco grupos pierden consistencia orgánica y capacidad reivindicativa.

Las prácticas llevadas a cabo por las OUP tienen efectos en la estructura y en el desarrollo de las ciudades en las que operan. Pero este impacto es distinto en cada caso. Considerando en conjunto la contribución urbana realizada por los cinco grupos de OUP en las ciudades mexicanas, se advierte que su impacto se despliega tanto en la periferia como en el centro de la ciudad, en la producción de vivienda y en la urbanización popular. Visto diacrónicamente contribuyeron a la ampliación de la periferia durante el periodo de fortalecimiento de los colonos; e incidieron en la consolidación del centro de las ciudades, en la fase de reactivi-

vación de los inquilinos y la emergencia de los damnificados y de los solicitantes. Sumadas estas distintas aportaciones, cabe sostener que estos grupos han operado como actores reales en el reciente proceso de urbanización mexicano. Sin embargo, actualmente su influencia tiende a desaparecer en la periferia, principalmente de las áreas metropolitanas, y está disminuyendo en el centro (Coulomb y Duhau, 1989; Duhau, 1997).

De este breve contexto nacional acerca de la OUP, se desprende la tesis central de que en el periodo de estudio se registra un doble fenómeno: *a*) por una parte, el fortalecimiento orgánico y el impacto urbano crecientes de las OUP desde inicios hasta finales de la década de 1980; y *b*) por otra, la desarticulación y desactivación progresivas y la pérdida de incidencia urbana desde principios de la década de 1990 a la fecha.

### *Los vecindados del centro y los solicitantes de vivienda en la periferia del D.F.*

Como se señaló con anterioridad, la ciudad de México es el espacio urbano del país en el que ha emergido el mayor número de OUP y sus luchas más relevantes. En ese contexto, analizamos ahora dos experiencias habitacionales diferentes que han tenido lugar en esta ciudad. Una es representativa de las vecindades habitadas por los sectores populares de la delegación Cuauhtémoc en el centro del D.F. La otra gira en torno a un fraccionamiento popular periférico “Canaña”, puesto en marcha por la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda, Libertad (UCISV-Libertad), una fuerte organización que actuó en la delegación Iztapalapa desde mediados de la década de 1980 a la fecha.

El contexto institucional, tanto habitacional como urbano, en el que se llevaron a cabo ambas experiencias es distinto. UCISV-Libertad surge en el marco de la política habitacional innovadora introducida por el Fondo Nacional de la Habitación Popular (Fonahpo) creado en abril de 1981. Sus aportaciones principales fueron: constituir reservas territoriales para el desarrollo de programas habitacionales, planificar el desarrollo de fraccionamientos populares, financiar la adquisición y la urbanización del terreno, establecer el modelo de la vivienda progresiva, ofrecer la opción de edificar las viviendas a través de constructoras profesionales o autoconstruirlas colectivamente, instalar servicios urbanos fundamentales desde el inicio del asentamiento, aportar recursos para la asesoría a los solicitantes, y otorgar crédito colectivo (es decir, no individual) para demandantes cuyos ingresos fueran inferiores a 2.5 veces el salario mínimo vigente. Por ello, Fonahpo se constituyó en una institución que atendía demandas habitacionales colectivas (es decir, que respondía al carácter grupal de las OUP) y en una de las pocas salidas institucionales al alcance de los trabajadores informales para obtener vivienda. Durante los primeros siete años del funcionamiento de

Fonahpo (1981 a 1987), un elemento político adicional fue su *modus operandi*. No aplicó criterios corporativos y aceptó y dio curso favorable a las solicitudes de los grupos sociales independientes, entre ellos, de las OUP. Esto permitió atender las demandas habitacionales y urbanas planteadas por ellas, especialmente por las más consolidadas. Después de 1987 eliminó el crédito financiero para la adquisición de la tierra, y progresivamente fue introduciendo criterios corporativos para la asignación de los créditos.

Las acciones de los vecindados del centro del D.F. se efectúan en el marco de la política urbana específica para esta zona de la ciudad creada a partir de 1998. Sus componentes son: Bando Informativo núm. 2 y Programa de Predios de Alto Riesgo. El primero restringe la construcción de vivienda en la periferia de la ciudad y la impulsa en las delegaciones centrales de ella. El segundo es un programa emergente para los predios amenazados de derrumbe en el centro del D.F. El organismo público descentralizado del gobierno de la ciudad que diseña las políticas y programas de vivienda popular y aporta los recursos financieros es el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI, 2003a).

#### Los grupos de vecindados del centro: 1985-2002

De acuerdo con la tipología de los grupos integrantes de las OUP antes expuesta, los habitantes de las vecindades centrales combinan rasgos de los inquilinos y de los solicitantes de vivienda. Su actual lucha urbana es menos visible y notoria que la de los grupos restantes, pero constituye uno de los pocos factores que inciden en la rehabilitación habitacional. Por ello es importante considerar el tipo de acciones que llevan a cabo para recuperar la función que la vivienda cumple en el centro histórico del D.F.

#### El espacio de la acción social

Entre los edificios del centro de la ciudad, se encuentran numerosas vecindades o viviendas populares. La antigüedad de las construcciones varía así como las condiciones físicas o estructurales y de habitabilidad. El 33 por ciento de ellas tiene un solo cuarto; el resto tiene de dos a cinco. En el primer caso, las diferentes funciones habitacionales (asearse, cocinar, comer, convivir y descansar) se llevan a cabo en un solo espacio o “cuarto redondo”. El 13 por ciento de las viviendas no dispone en su interior de agua entubada. La mayoría de ellas no cuenta con baño ni regadera integrados a cada vivienda sino que estos servicios son comunes o colectivos; el 28 por ciento se encuentran en mal estado. Esto equivale a 9,000 viviendas. Las características más comunes de las viviendas

son: deterioro, hundimientos, humedades, invasión, en proceso jurídico y con amenazas de desalojo, con rentas congeladas y catalogadas por el INAH y el INBA como edificios con valor histórico y, por ello, prácticamente intocables, aunque se encuentren en alto riesgo. En casos extremos, los inmuebles catalogados sólo conservan la fachada a punto de derrumbarse y el resto está abandonado por sus condiciones de inhabilitabilidad. Un inmueble colapsado en su estructura debe ser demolido; pero en los edificios catalogados y que pueden ser rehabilitados es necesario que se recuperen al menos la fachada y la primera crujía (Gobierno del Distrito Federal, 2000: 9).

En un alto porcentaje, los actuales miembros adultos de estos grupos han nacido en esas vecindades. El número de familias residentes en una vecindad es variable; oscila entre 20 y 30. Alrededor del 40 por ciento de los habitantes del centro no son propietarios sino inquilinos. Hasta 1993, arrendaban sus viviendas bajo el régimen de rentas congeladas.

La reforma de la ley inquilinaria provocó que en 1998 muchos inquilinos tuvieran que desalojar las viviendas por no poder pagar el aumento de las rentas.

En el caso de vecindades de las cuales no existe un dueño cierto jurídicamente (es decir, que se encuentran intestadas o su propiedad está en litigio), es frecuente que los habitantes sean posesionarios, es decir, que se hayan apropiado de una parte de la vecindad (normalmente de un cuarto) sin que exista una relación de inquilinato o de arrendamiento. En la delegación Cuauhtémoc, de las seis zonas en las que operativamente se divide el centro, en la centro-norte existe el mayor número de inmuebles clasificados como de alto riesgo. En el D.F., como en los centros históricos de las grandes ciudades latinoamericanas, constituye un común denominador la necesidad del rescate y rehabilitación de muchas de sus viviendas.

#### El crédito y sus condiciones

La vivienda constituye un bien duradero cuya adquisición y pago de contado es imposible para los sectores populares. Éstos acusan fuertes dificultades incluso para acceder al crédito, a pesar del ahorro que realizan para reunir el 30 por ciento del enganche requerido. El crédito público para vivienda popular es su única posibilidad para adquirir vivienda. Pero es significativa la elevación ocurrida en los costos de los proyectos habitacionales y, paralelamente, la de los ingresos comprobables que se exige a los solicitantes de los créditos públicos para vivienda. Dependiendo del tipo de vivienda, oscila entre tres y ocho veces el salario mínimo (SVM). La cantidad mensual a pagar es el 15 por ciento de los ingresos individuales o 20 por ciento del ingreso familiar mensual. El plazo máximo de recuperación del crédito es de 30 años. El ingreso

requerido es notablemente mayor en INVI que en Fonahpo (de dos a casi cuatro veces más).

Para contextualizar estos requisitos es aclaratorio relacionarlos con dos datos fundamentales. El primero es la “línea de pobreza” establecida por el Banco Mundial. De acuerdo con ella, es pobre quien gana menos de 3 dólares diarios. En México actualmente esta cantidad oscila en torno a un salario mínimo. El segundo dato es el reconocimiento, realizado por el gobierno mexicano, de que el 51.7 por ciento de la población del país es pobre. Ésta no necesariamente gana menos de un salario mínimo (41.53 pesos diarios en enero de 2003); pero indudablemente no es sujeto del crédito público de INVI, y menos del privado.

#### Los grupos constituidos

En las vecindades centrales predominan los grupos de solicitantes integrados por habitantes de la propia vecindad, sobre los constituidos *ad hoc* para obtener crédito del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). En el primer caso, existen conocimiento mutuo y vínculos sociales (no necesariamente solidarios) entre sus miembros. Los segundos son grupos preferentemente funcionales.

De acuerdo con los dos programas habitacionales del INVI, los créditos otorgados por esta institución en la delegación Cuauhtémoc para vivienda en conjunto fueron: *a*) en el año 2001, para 1,064 viviendas en 38 predios con 28 viviendas en promedio; y *b*) en el año 2002 para 4,902 viviendas en 144 predios con 34 viviendas en promedio. En ambos casos, el número de predios es equivalente al número de grupos beneficiados, es decir, en total 182. En esta misma delegación, los datos sobre créditos otorgados para viviendas en lote familiar son muy inferiores: ninguno en 2001 y sólo 159 en 2002 (INVI, 2003b). Ello evidencia la mayor dificultad de que las familias cuenten con lote propio en esa delegación.

Desde del punto de vista sociopolítico, la importancia de los datos anteriores estriba que en la vivienda lote familiar, no existen condiciones objetivas para constituir un grupo, porque se trata predominantemente de una familia extensa que se desdobla. Por el contrario, en la vivienda en conjunto, la solicitud formal del crédito los obliga a incorporar su dinámica colectiva anterior o a generar una nueva para tramitar el crédito. Ésta pasa necesariamente por el registro del grupo como asociación civil y, en consecuencia, por operar como un colectivo. A pesar de esto, en los avecindados del centro no ocupa un lugar importante la dimensión orgánica, autogestiva y política. Desarrollan escasamente una nueva identidad y cohesión, las cuales son factores centrales en la articulación de

cualquier grupalidad. Son grupos vecinales “naturales” o funcionales antes que organizaciones sociopolíticas. La obtención del crédito y la rehabilitación de las viejas vecindades, a pesar de que constituye una de las bases de su convivencia futura, genera en ellos una relación pragmática: la necesaria para obtener vivienda nueva. Por otra parte, en la actualidad estos grupos no suelen establecer vínculos entre ellos ni están dando lugar a organizaciones más amplias. Es decir, la base social está disgregada y, por ello, es menos atractiva para la intervención de los activistas partidarios. Y, aunque los avecindados dependen del gestor que tramita el crédito, esta relación se encuentra menos mediada políticamente que en el caso de los grupos, más amplios, de solicitantes de vivienda, como lo demuestra el siguiente caso de estudio.

#### Las vecindades y los problemas urbanos del centro

A pesar de las ventajas comparativas que puede significar disponer de vivienda en el centro de la ciudad, existen también fuertes inconvenientes. En una consulta pública sobre necesidades urbanas, realizada como parte de un ejercicio de “planeación participativa” por la delegación Cuauhtémoc, los vecinos consideraron como prioritarios los siguientes problemas: *a)* la inseguridad pública propiciada por la vigilancia policiaca insuficiente, especialmente durante la noche, e incrementada por la falta de alumbrado público; *b)* la carencia de inmuebles para depositar la basura y su deficiente recolección; *c)* el tráfico y consumo de drogas por parte de las bandas juveniles incluso dentro de las vecindades; *d)* la proliferación de vendedores ambulantes que dificulta la circulación vial en el centro y deja basura en las calles, y *e)* la venta de mercancía robada.

Por su parte, los entrevistados en el trabajo de campo agregaron otros: *f)* la carencia de espacios recreativos y deportivos, *g)* la lentitud del tráfico, ocasionada por los camiones de carga que transitan por el centro, *h)* la persistencia y aumento de la contaminación ambiental, e *i)* los conflictos de convivencia entre vecinos. Para los jóvenes del centro, en particular, este no es un espacio gratificante. Muchos de ellos no estudian. Algunos trabajan como vendedores ambulantes o se vuelven delincuentes. Pero, aun en el caso de que finalicen una carrera profesional, no cuentan con oportunidades ni garantías de conseguir empleo remunerador. Desde principios de 2003, el gobierno central del D.F. (no el delegacional) inició para ellos varios programas: becas, cursos de capacitación y una campaña preventiva: Programa Jóvenes en Riesgo (entrevistas a Irma Bautista, Mary Vélez y Norma Díaz).

Retomando los principales elementos constitutivos de los avecindados del centro del D.F., sus rasgos definitorios son: *a)* grupalidad de escala reducida:

alrededor de 20 familias; *b*) residencia en espacios altamente urbanizados y con gran valor histórico; *c*) dependencia del asesor o agente externo; *d*) débil capacidad autogestiva; *e*) escasa politización; *f*) aislamiento o falta de vínculos con otros grupos urbano-populares, y *g*) nulo impacto en la creación de estructuras orgánicas populares de carácter regional o nacional.

Su principal efecto físico-espacial es la rehabilitación del stock habitacional del centro del D.F. Su incidencia sobre la reestructuración y refuncionalización de esta parte de la ciudad y en la solución de sus problemas urbanos es limitada. Se reduce a plantearlos a los miembros de los comités vecinales, los cuales, a su vez, los transmiten, directamente o mediante oficios, a los funcionarios delegacionales responsables de su atención. Bajo este aspecto, son actores habitacionales, no urbanos.

La Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda, UCISV-Libertad: 1984-2002

Esta organización constituye un caso paradigmático, pero no excepcional, de autogestión popular. Elaboró y puso en práctica un proyecto integral que dio origen a uno de los fraccionamientos populares más grande y emblemático de las OUP con 1086 viviendas y todos los servicios urbanos. Introdujo prácticas innovadoras tanto urbanas como ecológicas y productivas. Demostró capacidad importante de movilización y de ahorro colectivo (Moctezuma, 1999). Se inició antes de los sismos en el D.F., que impulsaron un momento excepcional en la combatividad de los damnificados y en la solidaridad social. Pero en su trayectoria reciente, acusa el deterioro de sus componentes centrales y no se avizora para ella una perspectiva favorable.

#### Origen y etapas básicas

UCISV-Libertad, que puso en marcha el proyecto habitacional llamado “Cananea”, se constituyó en 1984. Ella es una de las cuatro organizaciones que se asientan en el predio llamado “El Molino” (SN, 1995 y entrevista a Alejandro Suárez). La UCISV-Libertad forma parte de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) que, a su vez, es una de los integrantes de la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM). Ambas organizaciones contaron con fuerte influencia al interior de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Ello indica que UCISV-Libertad se inspira y está respaldada por la estructura, proyecto e ideología de dos organizaciones sociopolíticas mayores.

Antes de su constitución formal (agosto de 1983-marzo de 1984), UCISV-Libertad se dedicó a planear, promover y diseñar la estructuración de su organiza-

ción. Se integró con siete grupos o bases que se ubicaban en diferentes ámbitos y delegaciones de la ciudad. Cada base contaba con un coordinador y cuatro o cinco brigadas de 25 familias en cada una. La UCISV llegó a aglutinar entre 3,000 y 5,000 solicitantes. Éstos se dedicaban a actividades económicas variadas. Eran empleados, obreros, artesanos y comerciantes ambulantes. Vivían en casas de alquiler o en calidad de “arrimados” en barrios dispersos en la ciudad (entrevistas a Alejandro Suárez y a Mariano Salazar).

En la evolución de la organización, el fuerte aprendizaje organizativo y operativo obtenido en las fases iniciales permitió acortar el tiempo requerido para la construcción habitacional de las posteriores. Pero el grado de cooperación social acusó una tendencia regresiva, porque al iniciarse nuevas etapas de edificación, dejaban de participar los que lo habían hecho en las anteriores. La consecución del objetivo habitacional desactivaba a los beneficiados.

#### El terreno y el proyecto habitacional y urbano

El predio adquirido está ubicado en la periferia sur-oriental del D.F., dentro de la delegación Iztapalapa. Formaba parte de la reserva territorial de que disponía el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo). En 1980, estaba fuera de la ciudad. Las redes de agua potable y drenaje se encontraban alejadas del predio. Era el terreno de una vieja hacienda dedicada a la producción lechera. Medía 52 hectáreas de las cuales se utilizaron 22 para el proyecto de El Molino. En los programas urbanos del gobierno del D.F., la introducción de servicios urbanos a esta zona estaba prevista hasta el año 2000. Para ser incorporada al desarrollo urbano de la ciudad, se obtuvo la licencia del uso habitacional del suelo, pero no la de factibilidad o dotación de servicios, entre ellos el drenaje. Por ello, se planteó instalar un drenaje alternativo que no necesitara conectarse a la red general.

El área del terreno o lote individual de cada casa es de 84 metros cuadrados. La vivienda construida es el llamado “pie de casa”, de 45 metros cuadrados en planta baja, con posible crecimiento futuro, en un segundo nivel, sumando 90 metros cuadrados. La casa se entrega en “obra negra”, es decir, sin puertas, ventanas ni muebles de baño ni de cocina, ni instalación eléctrica. Se utilizaron algunos elementos prefabricados, por ejemplo, placas para los techos.

#### La asesoría técnica

Por primera vez en la historia de las OUP, UCISV-Libertad hizo dos concursos de asesoría para el proyecto y realizó un convenio de servicios profesionales. Para los aspectos urbanos y arquitectónicos, se seleccionó al Centro de la Vi-

vienda y Estudios Urbanos (Cenvi). Incluyó el diseño urbano y habitacional, la dirección de la obra, la adaptación del pequeño casco de la hacienda como centro cultural, así como el diseño del mercado y de la iglesia. Otra asesoría fue la dedicada al drenaje alternativo. Fue aportada por el Grupo de Tecnología Alternativa (GTA). Diseñó el Sistema de Reciclamiento de Desechos Orgánicos (Sirdo). Por fallas técnicas, nunca funcionó. Obligó a construir letrinas anti-higiénicas provisionales en cada vivienda y manzana. Finalmente tuvo que instalarse el sistema tradicional de drenaje. Significó una experiencia negativa, un experimento fallido y costoso. Provocó desgaste en la comunidad (entrevista a Alejandro Suárez).

#### Las condiciones para el acceso al crédito

Estas condiciones fueron las establecidas por Fonahpo. Inicialmente (1985) eran: 10 por ciento de enganche; 9 por ciento de interés anual y 21 por ciento de afectación al salario por el pago mensual del crédito; y un plazo máximo de amortización de 20 años (Cenvi, s.f.: 86). En 1989, se mantuvo el mismo enganche (10 por ciento), pero se incrementó al 20 por ciento el interés anual y al 25 por ciento la afectación del salario; además, el plazo se redujo a ocho años (Cenvi, s.f., 169). El crédito otorgado por el Fonahpo permitió la compra y urbanización del predio, la edificación de un pie de casa para cada socio, el pago de los estudios y proyectos (urbano y arquitectónico) y de las tareas administrativas y de gestión.

#### Un proyecto integral

UCISV-Libertad se propuso iniciar y materializar un proyecto no sólo habitacional sino también urbano (equipamiento y servicios básicos), no únicamente coyuntural sino de largo plazo, no solamente reivindicativo sino alternativo e integral. Sus componentes fundamentales son los siguientes:

- *Ecológico*: esta OUP utilizó principios ambientalistas para enfrentar tres problemas: la construcción de un eje vial en el predio, el taller de reciclado de plástico y el drenaje alternativo (SIRDO). Esto demuestra que su ecologismo era “instrumental” en función de otros proyectos del propio fraccionamiento.

- *Educativo*: UCISV-Libertad logró que se dotara a la unidad habitacional de un jardín de niños o kinder, un Centro de Desarrollo (Infantil), Cendi, una primaria abierta para niños, primaria y secundaria abiertas para adultos y un Conalep. Hay también una escuela de educación media superior o preparatoria. Cuenta, asimismo, con una biblioteca pública, en la que se fomenta la lectura y se imparten también cursos de alfabetización.

- *Cultural*: la UCISV-Libertad concibió la cultura como elemento central de identidad colectiva para cultivar la memoria y el saber comunitarios, celebrar el aniversario de la colonia y conmemorar acciones colectivas relevantes, así como revitalizar la convivencia, las costumbres y las tradiciones comunitarias.

- *De salud*: “Cananea” cuenta con un consultorio para atención médica y un centro de medicina alternativa en el que se da atención médica y se realizan talleres. Pero dicha atención no es ya suficiente. UCISV-Libertad demandó repetidamente que se instalara un centro médico u hospital y está ya programada su construcción.

- *Económico-productivo*: se trata de miniempresas colectivas planeadas para generar ganancias y empleo. Actualmente se encuentran en operación el taller de reciclado de plásticos, la tabiquera y un taller de costura que se ha convertido en maquilador de ropa. La tabiquera, en particular, es un taller o miniempresa destinado a la producción del tabique o block necesario para la construcción de las viviendas para la colonia (entrevista a Alejandro Suárez). A la fecha, se encuentra funcionando con problemas financieros.

- *Abasto-consumo*: en el diseño de la colonia, se previeron espacios para instalar un local comercial en el centro de cada sección de ella. La compra de productos o artículos de primera necesidad se realiza en una tienda cooperativa y en un mercado instalados dentro de la colonia. Ésta cuenta también con una cocina-comedor comunitario y una cafetería en el casco de “la hacienda”.

- *Recreativo-Deportivo*: en la colonia hay un centro deportivo con dos canchas de fútbol, una de fútbol rápido y cuatro de básquetbol. Se trata de una dotación privilegiada de estos servicios en el conjunto de las colonias populares.

- *Financiero*: su objetivo principal era impulsar la capacidad de ahorro interno en la organización para cubrir el enganche del crédito de la vivienda y los gastos ocasionados por la gestión de trámites. Para lograrlo, los ahorros se depositaban en una cuenta mancomunada, controlada a través de tres firmas.

- *De gestión administrativa y jurídica*: consistió en tramitar la documentación necesaria para obtener el crédito financiero y el registro de la figura asociativa conveniente: cooperativa o asociación civil.

- *Servicios religiosos o de culto*: se centró en la construcción de una iglesia dentro de la colonia.

Estas 10 dimensiones del proyecto de la UCISV-Libertad demuestran la complejidad y el carácter innovador de esta organización. Ella ha sido pionera en la planeación habitacional y urbana de los asentamiento populares así como en la dotación de la infraestructura y del equipamiento requeridos.

### Efectos habitacionales y urbanos

Como lo demuestran los logros obtenidos en relación a los objetivos planteados en su proyecto integral, el impacto habitacional y urbano de “Cananea” es significativo. Ambos se han dado en la periferia de la ciudad, impulsando la producción habitacional y la urbanización de espacios que carecían por completo de infraestructura y servicios urbanos. Por lo que se refiere al equipamiento y a las instalaciones existentes en la colonia, su situación es privilegiada respecto de la mayoría de los asentamientos populares. En esa medida, ha contribuido a una expansión ordenada de la ciudad. En el conjunto de las OUP, “Cananea” es indudablemente el actor urbano más complejo.

Pero a pesar de ser “Cananea” una OUP paradigmática y haber alcanzado la mayoría de sus objetivos, desde finales de la década de 1990 se encuentra en una etapa de reflujo y deterioro progresivo de sus elementos componentes. Esta fase es previsible en la evolución de todo proceso autogestivo, porque incluso en la etapa de consolidación del asentamiento, el proceso socioorganizativo se enfrenta al riesgo de su propio futuro (Coulomb y Sánchez, 1992: 191). Paradójicamente, USCIV-Libertad está pagando su innegable éxito urbano con el debilitamiento organizacional.

Cuatro son las razones de su crisis interna: *a)* el logro de las metas establecidas redujo significativamente la razón de ser de la organización; *b)* ante la inexistencia de nuevos proyectos colectivos, se incrementaron las actitudes pragmáticas y poco solidarias; *c)* la incursión en procesos electorales y el proceso de partidización en el que está inmersa con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) la afectó centralmente, y *d)* la conversión de la mayor parte de sus líderes en funcionarios públicos o en representantes populares la privó de dirección.

### Consideraciones finales

Vistas en retrospectiva, las últimas décadas del siglo XX encierran en su breve intervalo procesos de diverso signo que son tanto el producto complejo de la estabilización de tendencias previas, como el resultado imprevisto de la irrupción de otras nuevas. Ambas confluyen en la emergencia de escenarios sociales inéditos que han empezado a modificar el tejido social de la vida urbana.

En lo que concierne a la urbanización, un proceso estructural de largo aliento que tuvo su más fuerte ímpetu alrededor de la mitad del siglo pasado, nos tomamos en el periodo objeto de estudio con una estabilización del sistema urbano y una acentuación de su carácter metropolitano. Quizás el hecho más trascen-

dente en esos años haya sido la inversión de la pauta polarizadora de la estructura urbana en virtud de la cual la ciudad principal perdió parte de su extraordinaria fuerza concentradora, dando lugar a la emergencia de varias constelaciones metropolitanas rivales. En sentido general, en el panorama urbano nacional predominan en el último tercio del siglo xx las tendencias desconcentradoras del crecimiento urbano, en abierta oposición a las que fueron hegemónicas en el periodo inmediatamente anterior y durante la mayor parte de la centuria. Pero en virtud del carácter diferencial de la urbanización, dicha evolución –coherente por demás con el llamado ciclo del desarrollo urbano–, admite también la presencia simultánea de procesos concentradores de diversa escala que no alcanzan, sin embargo, a contrarrestar la tendencia dominante. Cabe destacar entre ellos la continuidad, y aun la acentuación, del área de influencia regional de la ciudad principal.

En la consolidación de estas tendencias ha incidido sin duda el replanteamiento y, en algunos casos, el reforzamiento del papel económico de las ciudades en el nuevo escenario económico global. Así, en la reorganización espacial de la producción que dicho escenario ha promovido son en general las ciudades situadas en el norte de país (en especial las de la franja fronteriza) las que se han visto más favorecidas por la inversión de flujos internacionales de capital, aunque en años recientes –y en con tal de esquivar la fuerte competitividad externa– éstos se han encauzado también hacia algunas ciudades del interior del país. Como parte de esta refuncionalización económica, la ciudad de México ha acentuado su vocación terciaria y de intermediación comercial, al tiempo que el país ha entrado de lleno en el concierto de las llamadas economías terciarias.

En tanto mercados de trabajo, sin embargo, las ciudades han atravesado por una serie de cambios y vaivenes económicos muchas veces dramáticos –como las devaluaciones de 1982, 1988 y 1994– que no permiten trazar nítidamente un panorama social consistente. No cabe duda de que el giro en la estrategia de crecimiento –del esquema de industrialización por sustitución de importaciones a la apertura externa y a la inserción económica global– ha sido el hecho trascendente del periodo, pero éste ha estado orquestado por una serie de altibajos económicos con mengua de las condiciones laborales que tornan difícil su credibilidad. Puede afirmarse sin temor a errar que la precariedad ha sido el rasgo distintivo de los mercados de trabajo urbanos durante estos años; aunque, naturalmente el efecto de estos procesos es diferencial según el ámbito urbano o regional en que nos situemos, pues de nuevo son las ciudades del norte las mejor libradas en términos relativos.

Quizá son estos factores los que explican la continua vigencia del sector informal, conformado en su mayoría por negocios unipersonales de baja pro-

ductividad y escasa remuneración, regidos por una lógica cuasi-doméstica. En tales condiciones halla su reproducción económica entre cerca del 40 o el 50 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada, aunque una pequeña fracción escape a tan críticas condiciones laborales.

A lo largo de estos años el sector informal se ha movido en perfecta sincronía con los altibajos marcados por la dinámica económica, mostrando un incremento sustantivo cada vez que se abre paso una coyuntura económica de crisis o recesión, aspecto que denota su flexibilidad e interconexión funcional con el sector formal. Queda corroborado que sigue siendo una fuerza de trabajo muy característica la que con más probabilidad halla cobijo en él: se trata de personas con niveles de escolaridad bajos o medios, preferentemente de sexo masculino, con más de 35 años, que se insertan en ocupaciones manuales de los servicios y el comercio; aspectos que sintetizan la segmentación propia de los mercados de trabajo urbanos del país.

Es este panorama tan poco esperanzador el que permite intelegir la irrupción de la violencia urbana como escenario social en el México finisecular. Resulta sintomático que también ella haya respondido de la misma manera y con la misma sensibilidad a las coyunturas de crisis económicas que el sector informal, exhibiendo sus niveles más altos justo en los momentos críticos del periodo. No obstante, en los últimos años la dinámica de la violencia urbana ha adquirido tal magnitud que parece independizarse de aquella que gobierna al mundo económico. Es menester no olvidar que es precisamente cuando más del 60 por ciento de la población mexicana vive en localidades urbanas y ha de encontrar en ellas los recursos para asegurar su reproducción material, cuando la mayoría de los mercados de trabajo urbanos nacionales ofrecen menguadas posibilidades de inserción laboral.

Esta violencia urbana ha estado precedida y ha coexistido, es importante decirlo, de un clima deterioro de las instituciones públicas, en especial las encargadas de velar por la seguridad y la justicia, de la generalización de la corrupción, de la práctica colisión entre autoridades y delincuentes, y de la falta de credibilidad en los poderes del Estado, que ha sido un caldo de cultivo inmejorable para su irrupción. En cierto modo, como señala Concha-Eastman (2002), éste es también un tipo de violencia ejercida desde arriba, antesala de la violencia cotidiana que se ejerce en contra de los habitantes de una serie de ciudades.

El hecho de que la violencia que asola a los centros urbanos sea principalmente de carácter económico, perpetrada indiscriminadamente contra la población en general y con la finalidad evidente de hacerse del patrimonio de otros, denota –como la ha sugerido Portes– que se trata de un modo alternativo de empresariedad, de una empresariedad que transgrede los límites de la legalidad y es, por tanto, *criminal*.

Guardando un paralelismo con el peso aún dominante de la ciudad principal en la estructura urbana, es precisamente ella y su entorno regional el ámbito espacial en el que mayores son los niveles de violencia en el contexto nacional; patrón que se reitera dentro de los límites internos de la ciudad capital, siendo las delegaciones centrales las que mayores índices delictivos registran.

En lo que atañe a la cronología de la movilización popular por la vivienda, el otro escenario social que hemos destacado, los ejes explicativos de su actuación han sido fundamentalmente tres: la estructura de oportunidades habitacionales, la dinámica interna de los grupos y, como consecuencia de los dos factores anteriores, sus desiguales efectos urbanos.

Para las OUP, la estructura de oportunidades sigue estando dada fundamentalmente por las instituciones vivendistas existentes, las políticas habitacionales y urbanas aplicadas y los recursos financieros públicos disponibles. En las primeras, resaltó la creación de nuevas dependencias habitacionales (federales, estatales y municipales), las cuales constituyeron un contexto nuevo para la acción de las OUP. Las políticas sectoriales impulsaron dos modelos opuestos de urbanización: uno abierto a la expansión urbana de la periferia y otro proclive a su control y, como contrapartida, a la revitalización y consolidación del centro. Este cambio de políticas influyó en la reestructuración de los grupos integrantes de las OUP. Por su parte, los programas de vivienda popular contaron inicialmente con recursos financieros adicionales a los presupuestales para vivienda popular provenientes de créditos internacionales, de donaciones de fundaciones altruistas y de la venta de empresas paraestatales. Operaron como elementos que incidieron en el reflujo de las OUP: la posterior reducción de los recursos presupuestales a las instituciones habitacionales, que hoy se basan únicamente en los de origen fiscal, y el endurecimiento de las condiciones para el acceso al crédito habitacional.

El cambio de las políticas sociales estratificadas por las focalizadas (Pronasol, Progresá, Oportunidades) no ha repercutido significativamente en el incremento de vivienda popular nueva. Progresá operó fundamentalmente en el campo. A través del Proyecto Hábitat, el programa Oportunidades aplica una parte muy reducida de su presupuesto para dichos servicios urbanos y para el mejoramiento de viejas viviendas urbanas, no para la producción habitacional.

Las principales razones que explican la dinámica de las OUP y las oscilaciones registradas en su evolución parecen encontrarse en tres factores: *a*) la modificación de las estrategias asumidas por ellas: de fundamentalmente autocentradas en la resolución de sus demandas sectoriales, a progresivamente proclives a la actuación en función de objetivos políticos externos, funda-

mentalmente electorales; *b*) la relación cuasi orgánica establecida entre las OUP y los partidos de izquierda, es decir, su “partidización”; *c*) el avance del pragmatismo sobre las posiciones inicialmente combativas y solidarias (Porter y Walton, 1976); y *d*) la conversión de la mayor parte de sus líderes en funcionarios públicos o en representantes populares, lo cual los está privando de sus direcciones propias.

En el balance de las OUP, es obligado resaltar que inicialmente la mayoría de las estrategias de movilización utilizadas por ellas obedecía a la atención directa de las necesidades e intereses internos de los integrantes de los grupos y a la solidaridad con otras organizaciones populares. La decisión de participar en los procesos electorales y, sobre todo, la articulación cuasi orgánica establecida con los partidos, tuvieron efectos disgregantes. Afectaron profundamente a la vida interna de los grupos porque implicaron el relegamiento de los intereses comunitarios y la supeditación de las OUP a los partidos.

La contribución habitacional y urbana de las diferentes OUP se lleva a cabo tanto en la periferia como en el centro de la ciudad, en la producción habitacional y en la urbanización popular. En particular, los solicitantes incidieron en la construcción de vivienda nueva, en la consolidación de los espacios intermedios de las ciudades y en la dotación de infraestructura y de equipamiento en su periferia. El principal efecto físico de la acción de los avecindados del Centro Histórico es la rehabilitación de viejos inmuebles y, en esa medida, en la regeneración de la ciudad. Al formular un juicio global sobre la acción habitacional y urbana de las OUP, cabe sostener que, no obstante las variaciones registradas en ellas, han operado como promotores del reciente proceso de urbanización mexicano. Vistas en perspectiva, han sido significativas para la producción de vivienda y para la dotación de servicios urbanos en los asentamientos populares. Sin embargo, para las OUP, la ciudad está siendo, cada vez menos, un bien público de consumo colectivo al que tengan acceso. En esa medida, las causas que les dieron origen no han perdido sentido ni han dejado de tener validez reivindicativa y política.

Anexo

DIAGRAMA I  
REGIONES Y METRÓPOLIS DE MÉXICO, 1970  
(25 primeras ciudades)

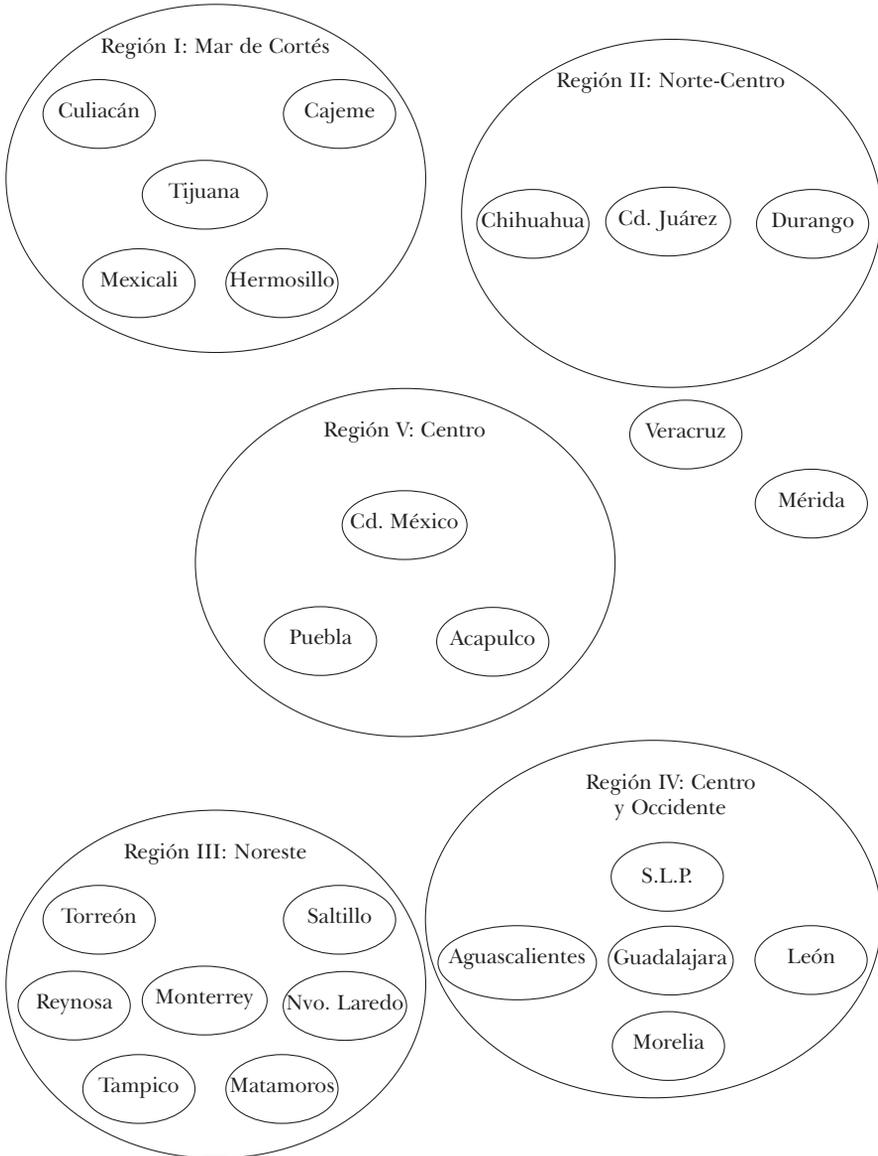
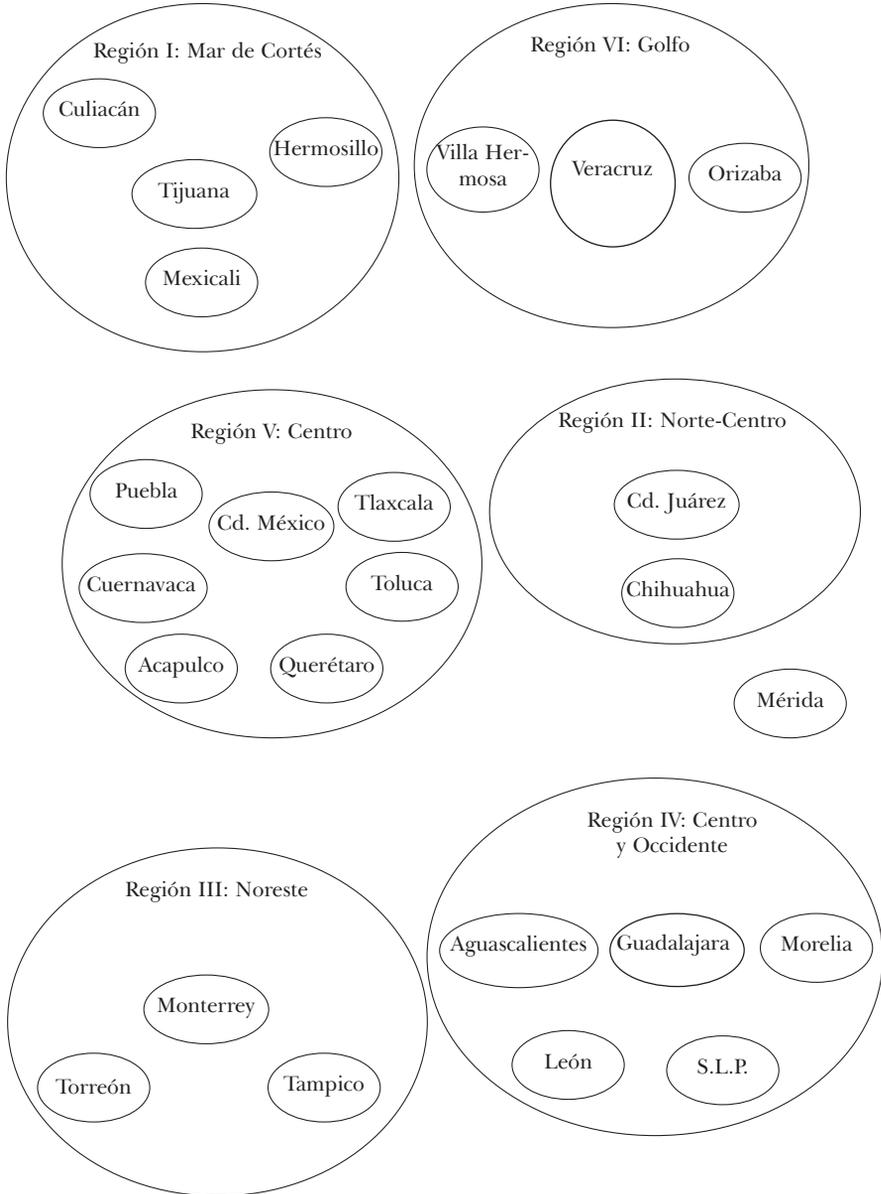


DIAGRAMA 2  
REGIONES Y METRÓPOLIS DE MÉXICO, 2000  
(25 primeras ciudades)



CUADRO A  
DISTRIBUCIÓN DE LAS 25 PRIMERAS CIUDADES DE MÉXICO,  
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL, 1970 Y 2000

<i>1970</i>				
<i>Ciudad</i>	<i>Región</i>	<i>Rango</i>	<i>Población</i>	<i>Participación %</i>
Cd. México	V	MT	6'874,165	50.04
Guadalajara, Jal.	IV	MT	1'193,601	8.69
Cd. Monterrey, N.L.	III	GC	858,107	6.25
Ciudad Juárez, Chih.	II	CM	407,370	2.97
Puebla, Pue.	V	CM	401,603	2.92
León, Gto.	IV	CM	364,990	2.66
Tijuana, B.C.N.	I	CM	277,306	2.02
Mexicali, B.C.N.	I	CM	263,498	1.92
Chihuahua, Chih.	II	CM	257,027	1.87
San Luis Potosí, S.L.P.	IV	CM	230,039	1.67
Torreón, Coah.	III	CM	223,104	1.62
Veracruz, Ver.	VI	CM	214,072	1.56
Mérida, Yuc.	VIII	CM	212,097	1.54
Cajeme, Son.	I	CM	182,904	1.33
Aguascalientes, Ags.	IV	CM	181,277	1.32
Tampico, Tams.	III	CM	179,584	1.31
Hermosillo, Son.	I	CM	176,596	1.29
Acapulco, Gro.	V	CM	174,378	1.27
Culiacán, Sin.	I	CM	167,956	1.22
Saltillo, Coah.	III	CM	161,114	1.17
Morelia, Mich.	IV	CM	161,040	1.17
Durango, Dgo.	II	CM	150,541	1.10
Nvo. Laredo, Tams.	III	CM	148,867	1.08
Reynosa, Tams.	III	CM	137,383	1.00
Matamoros, Tams.	III	CM	137,383	1.00
Totales			13'736,002	100.00
<i>2000</i>				
ZM Ciudad de México	V	MT	17'809,471	41.07
ZM Guadalajara	IV	MT	3'665,739	8.45
ZM Monterrey	III	MT	3'243,466	7.48
ZM Puebla	V	MT	1'701,151	3.92
ZM León	IV	MT	1'235,081	2.85
Ciudad Juárez	II	MT	1'218,817	2.81

2000				
<i>Ciudad</i>	<i>Región</i>	<i>Rango</i>	<i>Población</i>	<i>Participación %</i>
Tijuana	I	MT	1'210,820	2.79
ZM Toluca	V	MT	1'142,426	2.63
ZM Torreón	III	GC	915,262	2.11
ZM San Luis Potosí	IV	GC	850,828	1.96
ZM Mérida	VIII	GC	842,188	1.94
ZM Querétaro	V	GC	787,341	1.82
Mexicali	I	GC	764,602	1.76
ZM Tampico	III	GC	746,417	1.72
Cualiacán	I	GC	745,537	1.72
Acapulco	V	GC	722,499	1.67
ZM Aguascalientes	IV	GC	707,516	1.63
ZM Cuernavaca	V	GC	705,405	1.63
Chihuahua	II	GC	671,690	1.55
ZM Tlaxcala	V	GC	644,092	1.49
Morelia	IV	GC	620,532	1.43
Hermosillo	I	GC	609,829	1.41
ZM Orizaba	VI	GC	606,232	1.40
ZM Villahermosa	VI	GC	600,580	1.39
ZM Veracruz	VI	GC	593,181	1.37
Totales			43'360,702	100.00

Fuente: Elaborado con base en los censos de Población y Vivienda, 1970 y 2000. MT=metrópoli; CG=ciudad grande, CM=ciudad media.

## Bibliografía

- AGUILAR, Adrián Guillermo, Boris Graizbord y Álvaro Sánchez (1996), *Las ciudades intermedias y el desarrollo regional en México*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/El Colegio de México/Instituto de Geografía, UNAM.
- ALBA, Carlos (1998), "Tres regiones de México ante la globalización: los casos de Chihuahua, Nuevo León y Jalisco", en C. Alba, I. Bizberg y Helene Riviere (comps.), *Las regiones ante la globalización, competitividad territorial y recomposición geopolítica*, México, El Colegio de México.
- ARIZA, Marina y Orlandina de Oliveira (2003), "Tendencias y contratendencias de la feminización en México", en Fernando Pozos (comp.), *La vulnerabilidad laboral del modelo exportador en México*, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pp. 143-190.

- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1998), "Análisis de la magnitud y costos de la violencia en la ciudad de México", Documento de Trabajo R-331 (mimeo.).
- BANCO MUNDIAL Y FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD (1999), *Tendencias y causas del delito violento en México* (informe final, mimeo.).
- BENDESKY, León (2003), "Despliegue regional del empleo en las manufacturas", en Enrique de la Garza y Carlos Salas (comps.), *La situación del trabajo en México, 2003*, México D.F., Plaza y Valdés, pp. 273-296.
- BERRY, B. (1980), "Urbanization and Conterurbanization in the United States", en *Annals AAPSS*, núm. 451, septiembre.
- BRINGAS HERNÁNDEZ, Héctor H. (1990), "Muertes violentas. Han aumentado 150 por ciento en 25 años", *Demos, Carta Demográfica Sobre México*, pp. 13-14.
- CARRILLO, Jorge y M. Eugenia de la O (2003), "Las dimensiones del trabajo en la industria maquiladora de exportación de México", en Enrique de la Garza y Carlos Salas (comps.), *La situación del trabajo en México, 2003*, México, D.F., Plaza y Valdés, pp. 297-322.
- CENVI (s.f), *El Molino, Sección Cananea*, documento interno, México, D.F.
- COHEN, Jean y Andrew Arato (2000), *Sociedad civil y teoría política*, México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
- CONCHA-EASTMAN, Alberto (2002), "Urban Violence in Latin American and the Caribbean. Dimensions, Explanations, Actions", en Susan Rotkers (ed.), *Citizens of Fear: Urban Violence in Latin America*, New Brunswick, NJ, pp. 37-54.
- CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA JUSTICIA PENAL, A.C., Coparmex S.P., Instituto de Estudios de la Criminalidad Organizada, A.C. (Imeco) (2002), "México en el panorama delictivo mundial", noviembre, México, D.F.
- CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA JUSTICIA PENAL, A.C. (2003a), "La transparencia es condición indispensable para superar la inseguridad", Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, México, D.F.
- (2003b), "La impunidad en México 2001", México, D.F.
- CORONA, Rodolfo y R. Tuirán (1994), "Migración hacia las ciudades de tamaño intermedio. Profundas transformaciones regionales", en *Demos, Carta Demográfica sobre México*, núm. 7, pp. 21-22.
- COULOMB, R. y E. Duhau (1989), *Políticas urbanas y urbanización de la política*, México, D.F., UAM-A.
- y C. Sánchez M. (comps.) (1992), *Pobreza urbana, autogestión y política*, México, D.F., CENVI,
- DUHAU, E. (1997), "La urbanización popular en la ciudad de México", en M. Schteingart (1997), *Pobreza. Condiciones de vida y salud en la ciudad de México*, México, El Colegio de México, pp. 29-42.
- (1998), *Hábitat popular y política urbana*, México, M.A. Porrúa.

- ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO (2000), México, D.F., INEGI.
- FEENSTRA, Robert C. y Gordon Hanson (1997), "Foreign Direct Investment and Relative Wages: Evidence from Mexico's Maquiladoras", *Journal of International Economics* 42, pp. 371-393.
- FLECK, Susan (2001), "A Gender Perspective on Maquila Employment and Wages in Mexico", en Elizabeth Katz y María Correia (eds.), *The Gender of Economics in Mexico. Work, Family, State, and the Market*, Washington, DC, Banco Mundial, pp. 133-173.
- GARCÍA, Brígida (1996), "Las implicaciones del nuevo modelo de desarrollo", en *Demos. Carta demográfica sobre México*, núm. 9, pp. 15-16.
- y Orlandina de Oliveira (2001), "Transformaciones recientes en los mercados de trabajo metropolitanos de México: 1990-1998", en *Estudios Sociológicos*, vol. XIX, núm. 57, pp. 653-689.
- GARZA, Gustavo (1991), "Dinámica industrial en la ciudad de México, 1940-1988", *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 6, núm. 1, (16), pp. 209-214.
- (1994), "Dynamics of Mexican Urbanization: Mexico City Emerging Megalopolis and Metropolitan Monterrey", *Urbana: Análisis y Métodos*, vol. 1, núm. 1, pp. 29-42.
- (1999), "Globalización económica, concentración metropolitana y políticas urbanas en México", *Estudios Demográficos y Urbanos*, pp. 269-311.
- (2000a), "Tendencias de las desigualdades urbanas y regionales en México, 1970-1996", *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 15, núm. 3, pp. 489-532.
- (comp.) (2000b), *La ciudad de México en el fin del segundo milenio*, Gobierno del Distrito Federal y El Colegio de México.
- (2003), *La urbanización en México en el siglo XX*, México, D.F., El Colegio de México.
- GEYER, Hermanus S. y Thomas Kontuly (1993), "A Theoretical Foundation for the Concept of Differential Urbanization", *International Regional Science Review*, vol. 15, núm. 2, pp. 157-177.
- GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (2000), *Bando número 2*, 7 de diciembre.
- (2002), *Reglas de operación y políticas de administración crediticia*, noviembre.
- GRAIZBORD, Boris (1984), "Perspectivas de una descentralización del crecimiento urbano en el sistema de ciudades de México", *Revista Interamericana de Planificación*, vol. XVIII, núm. 71, septiembre.
- (1992), "Sistema urbano, demografía y planeación", *Revista Ciudades*, año 3, núm. 12, octubre-diciembre.
- IAN CRAGG, Michael y Mario Epelbaum (1996), "Why has Wage Dispersion Grown in Mexico? Is the incidence of reforms or the growing demand for skills?", *Journal of Development Economics*, vol. 51, pp. 99-116.

- INEGI (1991), *Estadística de la industria maquiladora de exportación, 1978-1988*, Aguascalientes, México.
- (1998), *Estadística de la industria maquiladora de exportación, 1992-1997*, Aguascalientes, México.
- (2000), “Experiencias en la medición del sector informal en México”, en *El mercado de valores*, año LX, agosto, edición en castellano, pp. 18-24.
- (2002), *Industria maquiladora de exportación*, Servicio de Información Estadística de Coyuntura (SIEC), <http://www.inegi.gob.mx/estadistica/espanol/economia/feconomia.html>, México, marzo.
- INSTITUTO CIUDADANO DE ESTUDIOS SOBRE LA INSEGURIDAD A.C. (ICESI), (2002), *Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, resultados finales*.
- INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI) (2003a), *¿Cómo adquirir un crédito para vivienda de interés social?*, folleto institucional.
- (2003b), *Informe de gestión 2001-2002*, junio.
- JUSIDMAN, Clara (1993), *El sector informal en México*, Cuadernos del Trabajo 2, México, D.F., Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- LATTES, Alfredo y M. Villa (1994), “La redistribución territorial de la población en América Latina: tendencias recientes”, ponencia presentada en el Seminario sobre Distribución y Movilidad Territorial de la Población y Desarrollo Humano, Bariloche, Argentina, 4-7 de mayo.
- LLAMAS HUITRÓN, Ignacio y Nora Garro Bordonaro (2003), “Trabajo, formalidad, escolaridad y capacitación”, en Enrique de la Garza y Carlos Salas (comps.), *La situación del trabajo en México*, México, UAM, IET, D.F., Solidarity Center y Plaza y Valdés, pp. 151-176.
- MASSOLO, A. y L. Díaz (1998), “Doña Jovita: una mujer en el movimiento urbano popular”, en *Mujeres para el Diálogo*, Conamup.
- MCARTHY, Ch. y M. Zald (1987), *Social Movements in a Organizational Society*, Nueva York, Brunswick.
- MELUCCI, A. (1999), *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México, El Colegio de México.
- MOCTEZUMA, P. (1999), *Despertares. Comunidad y organización urbano-popular en México, 1970-1994*, México, Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
- NEGRETE, María Eugenia (1999), “Desconcentración poblacional en la región Centro de México”, en *Estudios Demográficos y Urbanos*, México, El Colegio de México, pp. 313-352.
- OLIVEIRA, Orlandina de y Brígida García (1996), “Cambios recientes en la fuerza de trabajo industrial mexicana”, *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 11, núm. 2, mayo-agosto, pp. 229-262.

- (1998), “Crisis, reestructuración económica y transformación de los mercados de trabajo en México”, *Papeles de Población*, año 4, núm. 15, enero-marzo, pp. 39-72.
- OLIVEIRA, Orlandina de, M. Ariza y M. Eternod (2001), “La fuerza de trabajo en México: un siglo de cambios”, en J.G. de León y C. Rabell (comps.), *La población de México: tendencias y perspectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI*, México, D.F., Conapo y Fondo de Cultura Económica, pp. 873-923.
- OLIVERA LOZANO, Guillermo (1997), “Transformación metropolitana en México: efectos económico-territoriales del comercio exterior”, *Comercio Exterior*, vol. 47, núm. 4, pp. 259-269.
- PARNREITER, Christof (2002), “La ciudad de México: el camino hacia una ciudad global” (en proceso) (mimeo.).
- PORTES, A. y J. Walton (1976), *Urban Latin America*, Austin, University of Texas Press.
- PRIES, Ludger (1993), “Movilidad en el empleo: una comparación de trabajo asalariado y por cuenta propia en Puebla”, *Estudios Sociológicos*, 11:32, mayo-agosto, pp. 475-496.
- RAMÍREZ Sáiz, J.M. (1986), *El movimiento urbano popular*, México, Siglo XXI.
- (1990). “Urban Struggles and their Political Consequences”, en J. Foweraker y A. Craig, *Popular Movements and Political Change in Mexico*, Boulder y Londres, Lynne Rienner Publishers, pp. 234-246.
- (1993), *La vivienda popular y sus actores*, Puebla, Red Nacional de Investigación Urbana.
- y J. Regalado (comps.) (1997), *El debate nacional. Los actores sociales*, México, Diana.
- ROMÁN, Patricia (2001), *Micronegocios en México: principales características económico-laborales y sociodemográficas*, tesis de maestría en población, México, D.F., Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso.
- ROS, Jaime (1985), “La crisis económica. Un análisis general”, en P. González Casanova y H. Aguilar Camín (comps.), *México ante la crisis*, vol. Siglo XXI, 1, pp. 135-154.
- RUIZ CHIAPETTO, Crescencio (1986), “El desarrollo urbano de México, realidades y conjeturas”, en Blanca Rosa Torres (comp.), *Descentralización y democracia en México*, México, El Colegio de México.
- SALAS, Carlos (2003), “El contexto económico de México”, en Enrique de la Garza y Carlos Salas (comps.), *La situación del trabajo en México, 2003*, México D.F., Plaza y Valdés, pp. 37-54.
- SN (1995), *Mirando desde la UPREZ*, México, D.F., Casa y Ciudad.
- SOBRINO, Luis Jaime (1996), “Tendencias de la urbanización mexicana hacia finales de siglo”, *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 11, núm. 1 (31), pp. 102-129.

- (2003), “Rururbanización y localización de las actividades económicas en la región centro del país, 1980-1988”, *Sociológica, Revista del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana*, enero-abril, pp. 99-130.
- SOLÍS, Patricio (1997), “Cambios en el crecimiento de la población urbana y de la población rural”, *Demos, Carta Demográfica sobre México*, Instituto de Investigaciones Sociales y Coordinación de Humanidades, UNAM.
- STPS, Subsecretaría de Capacitación, Productividad y Empleo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2000), “El empleo en el sector informal de la economía. Comportamiento reciente y políticas públicas en México”, *El Mercado de Valores*, año LX, agosto, pp. 3-17.
- TELLO, Carlos (1987), “Introducción”, en Carlos Tello y Enrique González Tiburcio (comps.), *México: informe sobre la crisis 1982-1986*, México, UNAM, pp. 9-14.
- TILLY, Ch. (1995), “Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas”, *Sociológica*, núm. 28, UAM-A, pp. 13-36.
- , Louise Tilly y Richard Tilly (1975), *The rebellious Century 1830-1930*, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- TUIRÁN, Rodolfo (2000), “Tendencias recientes de la movilidad territorial en algunas zonas metropolitanas de México”, en *El mercado de valores*, año 60, núm. 3, México, D.F., Editorial Financiera, pp. 47-61.
- VILLARREAL, Andrés (2002), “Political Competition and Violence in Mexico: Hierarchical Social Control in Local Patronage Structures”, *American Sociological Review*, vol. 67, agosto, pp. 477-498.
- ZENTENO, René (2002), “Tendencias y perspectivas en los mercados de trabajo local en México: ¿más de lo mismo?”, en Brígida García (comp.), *Población y sociedad al inicio del siglo XXI*, México, D.F., El Colegio de México, pp. 283-318.
- ZEPEDA, Eduardo (2002), “Empleo y salarios en los noventa: los vaivenes del estancamiento”, en *Demos. Carta Demográfica sobre México*, núm. 15, México, D.F., Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, pp. 10-12.